



INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
INCOPESCA

PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR
PESQUERO Y ACUICOLA DE COSTA RICA

MARCO DE POLITICA DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

Version Borrador

ENERO 2020

CONTENIDO

Preámbulo	3
I. Introducción	3
II. Descripción del Proyecto	5
III. Cobertura del Reasentamiento	19
IV. Objetivos	20
V. Marco Legal Nacional / Internacional	21
VI. Territorios Pesquero y Acuícolas	26
VII. Acciones del Proyecto que Pueden Generar Reasentamiento Involuntario.	28
VIII. Marco de Política de Reasentamiento Involuntario	30
IX. Lineamiento para la Preparación de Planes de Reasentamiento.	44
X. Mecanismos de Consulta y Participación	48
XI. Mecanismos de Monitoreo.	49
XII. Mecanismos de Quejas y Reclamos.	50

ANEXOS

1. Estructura sugerida de los planes de reasentamiento
2. Contenido de los planes de reasentamiento abreviados

Preámbulo

Este documento fue actualizado sobre la base del estudio de prefactibilidad preparado por INCOPECA y finalizado en diciembre de 2019. Ninguna de las infraestructuras seleccionadas en el estudio de prefactibilidad generará un reasentamiento involuntario. Sin embargo, este documento se considera útil en caso de que se produzcan cambios en la selección de la infraestructura.

I. Introducción

El presente Marco de Política de Reasentamiento Involuntario (MPRI) elaborado para el proyecto “Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero de Costa Rica” elaborado por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura INCOPECA.

El MPRI describe los procedimientos y las responsabilidades institucionales para evaluar y gestionar los posibles riesgos e impactos que podrían ser generados por las obras del Proyecto que activen la política de reasentamiento involuntario del Banco Mundial, a lo largo del ciclo de las mismas.

Este MPRI se basa en la legislación de Costa Rica, normas aplicables de carácter internacional ratificadas por el gobierno costarricense, así como por los principios generales de la Política de Reasentamiento Involuntario OP 4.12 del Banco Mundial. A tal efecto este MPRI adopta la definición de la política OP 4.12 según la cual el reasentamiento involuntario abarca los efectos económicos y sociales directos resultantes de las obras financiadas por el Proyecto y causados por:

- a) La privación involuntaria de tierras, que da por resultado:
 - i) el desplazamiento o la pérdida de la vivienda;
 - ii) La pérdida de los activos o del acceso a los activos, o
 - iii) La pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no, o

- b) La restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como parques o zonas protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas desplazadas.

Los reasentamientos involuntarios pueden ocasionar problemas económicos, sociales, culturales y ambientales. Los sistemas de producción experimentan pérdidas, los activos productivos y las fuentes de ingreso disminuyen. Cuando las poblaciones son relocalizadas, sus habilidades productivas se ven disminuidas o no son aplicables y a veces, la competencia por los recursos es mayor. Las relaciones sociales y las estructuras comunitarias se rompen, la identidad cultural se debilita. A largo plazo, si no se planifican y se implementan medidas adecuadas, el reasentamiento involuntario puede causar severas dificultades, como ser: inseguridad alimentaria, alteración de lazos familiares y comunitarios, mayor pobreza, marginalidad y daño ambiental.

El MPRI tiene como propósito garantizar que, una vez agotadas las posibilidades de evitar o reducir el reasentamiento involuntario, las actividades de reasentamiento sean concebidas y ejecutadas como proyectos de desarrollo y que las personas reasentadas involuntariamente por el Proyecto puedan participar en los beneficios del mismo, recibir apoyo en sus esfuerzos por mejorar sus medios de subsistencia y sus niveles de vida o al menos devolverles, en términos reales, los niveles que tenían antes de ser reasentados

Es importante señalar que el presente Marco de Política de Reasentamiento Involuntario (MPRI) se ha desarrollado para guiar los potenciales procesos de adquisición de tierras, viviendas, predios, y servidumbres del país que podrían presentarse durante la ejecución del Proyecto de Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero, complementando los procedimientos establecidos principalmente en la Ley N°9286 de Expropiaciones con elementos adicionales establecidos en la política de Reasentamiento Involuntario del Banco Mundial (OP4.12), la cual también incluyen afectaciones por desplazamiento físico y económico, restricción del acceso a recursos y posibles de adquisición de tierras (incluyendo donaciones, servidumbres, etc.) que podrían generar efectos adversos a la población local.

La experiencia del Banco Mundial indica que las afectaciones asociadas al reasentamiento involuntario que se podrían producir como resultado de los proyectos de desarrollo, éstas podrían dar origen a problemas económicos, sociales y ambientales, incluyendo riesgos en los sistemas de producción; posible empobrecimiento de los afectados si estos llegaran a perder sus fuentes de ingresos y sus activos productivos; las personas se podrían trasladar a entornos en los que tal vez sus especialidades de producción resulten menos útiles y la competencia por los recursos sea mayor; las redes sociales y las instituciones de la comunidad se podrían debilitar; los grupos de parientes se podrían dispersar y la identidad cultural, la autoridad tradicional y las posibilidades de ayuda mutua se reducirían. Por consiguiente, la política de reasentamiento involuntario establece procedimientos y medidas destinadas a prevenir, reducir, mitigar y/o compensar por los impactos adversos asociados al reasentamiento.

Si bien en el contexto del presente Proyecto de Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero no se han identificado afectaciones específicas, en caso que el proyecto genere situaciones de reasentamiento involuntario, se aplicarán los procedimientos definidos en la OP 4.12, complementando las provisiones establecidas en la legislación nacional. Sin embargo, el objetivo del proyecto es evitar y/o reducir al mínimo la necesidad de generar casos de reasentamiento, pero en caso que estos sean necesarios se prepararán planes de reasentamiento específicos basados en el presente Marco de Política de Reasentamiento Involuntario.

II. Descripción del Proyecto

Costa Rica posee una enorme riqueza y un activo económico valioso en sus recursos pesqueros y el país históricamente no ha manejado apropiadamente este capital natural, el cual ha venido perdiendo valor y su potencial de contribuir a la economía del país. No obstante, si esta riqueza es manejada de manera estratégica, buscando recuperar su valor y buscando alcanzar la sostenibilidad, este recurso tiene el potencial de contribuir significativamente al sostenimiento de los medios de vida de las poblaciones pesqueras del país, generar nuevos empleos, e impulsar el desarrollo socioeconómico del sector pesquero nacional. Además, si esto se realiza con un enfoque de economía azul, en el que el desarrollo pesquero sustentable contribuye a los esfuerzos de conservación del ecosistema marino,

este esfuerzo puede además ayudar a cambiar la imagen que tiene el país respecto al manejo y conservación de sus recursos y biodiversidad marina. De esta forma el Gobierno estará impulsando una Costa Rica que no solo se desarrolla de forma sostenible y verde en tierra, sino de forma sostenible y azul en sus mares.

El Proyecto busca incrementar la contribución de los recursos marinos del país a la economía nacional y regional mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional y la gobernanza del sector pesquero, la generación de valor agregado mediante la mejora de infraestructura clave y de la comercialización, y el abordaje de los aspectos sociales y ambientales para una distribución equitativa y sostenible de los beneficios derivados de la pesca. Se dará prioridad a las pesquerías con el mayor potencial de crecimiento económico y generación de empleo para el país, tales como el atún, así como la evaluación de stock y planes de manejo para especies de corvina, pargo, robalo, camarón blanco, grandes pelágicos y langosta, entre otros, que son fundamentales para los medios de vida de las comunidades del pacífico y el caribe, dedicadas a la pesca artesanal en pequeña escala, mediana escala y avanzada. De igual manera, contempla el apoyo a grupos organizados acuícolas para el desarrollo de proyectos integrales que les permita el acopio, procesamiento y comercialización de sus productos, destinados también a garantizar la seguridad alimentaria de la población costarricense.

Para alcanzar esta visión, el proyecto genera acciones para actualizar la normativa vigente tendiente al ordenamiento de las pesquerías por parte del INCOPECA como entidad rectora del sector pesquero y acuícola nacional, que permita facilitar las condiciones para retomar el control y manejo de las especies con mayor valor, tanto oceánicas como costeras, lo que implicará además, apoyo para el desarrollo de planes de manejo y evaluación de stock para el aprovechamiento sostenible de especies de interés comercial y fortalecimiento de las capacidades científicas y técnicas de los funcionarios de la institución, a fin de promover la gestión pesquera moderna y el control pesquero que aseguren el cumplimiento de las normativas. A fin de contar con resultados a corto plazo, se dará un paso importante en la adopción de tecnologías que permitan acortar la brecha en la generación de información pesquera y acuícola en busca de modelos de gestión sustentables, por ello se contempla la inversión en un sistema integrado de información, base para la toma de decisiones e interacción de datos con otras entidades públicas y privadas, así como insumo para el usuario.

Por otra parte, se apoyará mediante capacitaciones, talleres, asistencia técnica y asesoría para el fortalecimiento de capacidades empresariales y asociativas a grupos de pescadores y acuicultores, creando, por medio del proyecto, condiciones para el desarrollo de estrategias de comercialización que podrán implementarse tanto en las obras de infraestructura que serán construidas como en las existentes que serán apoyadas mediante los recursos del préstamo, para ser manejadas por grupos organizados y capacitados para su administración, con lo cual se contribuye a mejorar su participación, fortalecimiento organizacional y competitividad en la cadena de valor de los productos pesqueros.

Durante la ejecución del proyecto, se desarrollará un programa de apoyo para continuar fortaleciendo mediante capacitación, asesoría técnica y planificación participativa a las Áreas Marinas de Pesca Responsable en comunidades costeras, que será complementario al diseño e implementación de instrumentos económicos como incentivos para servicios ecosistémicos marinos (PSEM) tendientes a apoyar las estrategias y acciones que los grupos llevarán a cabo, durante el proyecto y posteriormente, para la recuperación de los recursos pesqueros en nuestras costas en el Pacífico y Caribe. Otro programa estará orientado al fomento de oportunidades de empleo y medios de vida alternativos que incluye el diagnóstico socioeconómico de las comunidades pesqueras y acuícolas con el propósito de identificar oportunidades alternativas y complementarias a la actividad, así como para otros casos, la reconversión de quienes estén en capacidad de diversificarse en la actividad o cambiar a otras actividades, posteriormente a la ejecución del proyecto.

En esta tarea, los recursos oceánicos o pelágicos como el atún aleta amarilla tienen un papel estratégico clave. Estos recursos, han impulsado una industria procesadora nacional, pero históricamente han sido poco utilizados por los pescadores nacionales ante la competencia que tienen con flotas cerqueras extranjeras que pescan en aguas costarricenses, comprando licencias, pero desembarcando solo una pequeña fracción de sus capturas en Costa Rica. Cambiar este modelo puede devolverle al país el control de su riqueza atunera, y con ello generar los recursos financieros y pesqueros que pueden ayudar a mejorar otras pesquerías en las comunidades costeras del país.

Mejorar la gestión de la pesca de Costa Rica buscando la sustentabilidad en el uso de los recursos aumentará las oportunidades de desarrollo económico que el sector pesquero puede proporcionar al país y a las comunidades de pescadores y además contribuir a la resistencia de este sector al cambio climático. El sector de la pesca pelágica en particular, tales como atún, dorado, marlin, se prepara para una reestructuración que podría conducir a una pesca más sostenible, más empleos y más ingresos públicos a mediano plazo. Sin embargo, ésta y otras oportunidades de generación de valor no se alcanzarán si persiste la tendencia a la sobreexplotación, la falta de inversión y la baja rentabilidad de las actividades de pesca. Afortunadamente el Gobierno de Costa Rica ha dado prioridad a la reforma del sector pesquero y a la mejora de los medios de vida de las poblaciones que dependen de la pesca, y buscará alcanzar esta meta a través de la introducción de una serie de iniciativas de mejora, entre ellas, la mejora en la gestión del sector, la capacidad institucional, y la creación de un entorno empresarial propicio para la participación del sector privado, que en conjunto proporcionarán un punto de partida para revertir la situación actual, lo que permitirá contribuir al desarrollo sostenible de la pesca en Costa Rica.

Tomando en consideración el artículo 50 de la Constitución Política, el cual dispone que es obligación del Estado procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza y además, incorporando el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el proyecto contempla la implementación de acciones inclusivas, sostenibles, equitativas y focalizadas que visibilicen y reconozcan género, etnias y culturas. Con ello se busca asegurar la representación de población afrodescendiente, indígena, mujeres y jóvenes en los espacios de toma de decisión de manejo dentro de los grupos o asociaciones de pescadores y acuicultores. De igual manera se apoyará la generación de capacidades en las organizaciones, asociaciones o cooperativas donde participen las diversas poblaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías y valor agregado en sus encadenamientos productivos pesqueros y acuícolas, así como el establecimiento de infraestructura productiva, tanto en el Pacífico como en el Caribe, con uso de tecnología e innovación, con el objetivo de aumentar sus posibilidades de movilidad social y desarrollo empresarial.

Objetivo general del proyecto

Mejorar el manejo de la actividad pesquera y acuícola en Costa Rica con el fin de incrementar los beneficios de los recursos prioritarios para la economía nacional y el estímulo al desarrollo socioeconómico del sector mediante el fortalecimiento de la gobernanza institucional, el desarrollo de cadenas de valor y el fortalecimiento de mecanismos participativos de sostenibilidad social y ambiental.

Objetivos específicos del proyecto

En este proyecto se plantean cinco objetivos específicos, a saber:

- Incrementar la captura y desembarque de atún en el país, tanto por parte de la flota nacional como de la flota atunera extranjera, para aumentar los ingresos públicos generados por esta pesquería como resultado de las reformas legales e institucionales.
- Implementar planes de ordenamiento mediante medidas de manejo y monitoreo de la actividad pesquera para la recuperación de las pesquerías y fortalecimiento del control y vigilancia contra la pesca no regulada no reglamentada.
- Incrementar el porcentaje del precio final recibido por los pescadores y acuicultores por la venta de sus productos mediante la inversión en infraestructura y fortalecimiento de capacidades empresariales y asociativas que reflejen una mayor participación en la cadena de valor.
- Apoyar los esfuerzos de comunidades pesqueras para recuperar las pesquerías por medio de programas participativos e incentivos para el manejo sostenible con enfoque ecosistémicos.
- Apoyar los esfuerzos de reducción de pobreza, través de un programa de cogestores sociales, que faciliten el acceso de los beneficiarios más vulnerables a los servicios y programas gubernamentales que proveen apoyo social, empleo alternativo e iniciativas productivas.

Componentes y Subcomponentes

El proyecto consta de tres componentes estrechamente vinculados que se centran en el fortalecimiento de la gobernabilidad institucional y del sector pesquero, inversión en infraestructura pesquera y mejoras de las cadenas de valor, y aseguramiento de la sostenibilidad social y ambiental con esfuerzos para restaurar los recursos marinos del país además un cuarto componente que corresponde a la gestión y administración propia del proyecto

Componente 1: Fortalecimiento de la Gobernanza y el Manejo Pesquero

Las bases para el desarrollo del proyecto se contemplan en el Componente 1 para el fortalecimiento de la gobernanza institucional y las capacidades tanto del INCOPECA como de otras instituciones involucradas que deben apoyar mediante acciones efectivas, el ordenamiento, manejo, control y vigilancia de las pesquerías, tanto costeras como oceánicas.

Este componente apoyará el fortalecimiento de estas capacidades institucionales, reformas a los marcos normativos, y otras acciones del sector público necesarias para mejorar la gestión de las pesquerías de interés comercial costeras y oceánicas y orientarlas hacia la generación de mayor valor económico para el país. Se incluyen inversiones en asistencia legal para promover reformas normativas, actualización del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y fortalecimiento de la cooperación interinstitucional, apoyo en temas de inocuidad, registro de embarcaciones, investigación científica, y monitoreo, control y vigilancia de la pesca ilegal mediante sistemas de seguimiento y dispositivos electrónicos, así como un sistema integrado de información, cuya adquisición será contemplada en este proyecto.

El Componente 1 tendrá tres subcomponentes:

- **Fortalecimiento normativo e institucional para el manejo efectivo del sector pesquero:**
Se contempla contar con asistencia legal para actualizar la normatividad del sector pesquero

y del ordenamiento marítimo para garantizar un manejo efectivo de los recursos pesqueros que generen mayor valor para el país.

De igual manera, el fortalecimiento institucional incluyendo un análisis para la optimización del uso y las ganancias de los recursos públicos; la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola con articulación interinstitucional y la normativa requerida para el establecimiento de cuentas ambientales de los recursos marino-costeros. Es indispensable reforzar el reconocimiento del valor económico de la reconstrucción de las poblaciones de peces y la protección de otros recursos naturales marinos, de ahí la importancia de apoyar la ampliación de las cuentas ambientales de capital natural de Costa Rica.

La base normativa permitirá un ordenamiento pesquero y acuícola transparente, viable, actualizado y consistente, integrado a las metas de gestión del país y a los compromisos internacionales asumidos, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas sostenibles, que brinde certeza y facilite la planificación de las acciones del país y de los diferentes usuarios de los recursos, en el corto, mediano y largo plazo.

- **Investigación y sistema de información pesquera:** Para sustentar los planes de recuperación para las pesquerías sobreexplotadas, este subcomponente, con recursos del préstamo, financiará la contratación de consultorías y servicios para apoyar al INCOPECA en el establecimiento de acuerdos con instituciones académicas, organismos no gubernamentales, entidades públicas o privadas nacionales o internacionales, y con las mismas organizaciones de pescadores costeros, la evaluación de las poblaciones de peces y la recolección de datos biológicos y el monitoreo de variables socioeconómicas.

Como parte del esfuerzo de Gobierno Digital para que los servicios sean más accesibles, se financiará el desarrollo de una plataforma digital, "INCOPECA Digital", vinculada con varias entidades públicas de acceso directo por parte de los usuarios y generadora de información indispensable para la toma de decisiones por parte del INCOPECA y entidades nacionales e internacionales vinculadas con la temática pesquera y acuícola.

Los acuerdos también se centrarán en el fortalecimiento de la recopilación de datos y los sistemas analíticos dentro de INCOPECA, y en producir información específica diseñada

para anticipar y mitigar, por ejemplo, los efectos del cambio climático y proporcionar otros datos clave para una gestión eficaz. Por último, este componente financiará el diseño y establecimiento de un programa de observadores electrónicos, basado en información de video que será instalado en todos los buques de pesca que recogerá datos para un mejor seguimiento y gestión de la flota pesquera nacional.

- **Monitoreo, control y vigilancia:** Con el propósito de promover las medidas necesarias para el efectivo seguimiento y verificación en el cumplimiento de la normativa vigente es fundamental complementar la tecnología con el fortalecimiento de la vigilancia para el combate de la pesca ilegal a través del Servicio Nacional de Guardacostas.

Como primer paso, el subcomponente apoyará la implementación de un censo nacional pesquero y la campaña de registro de pescadores para su legalización, como un primer paso crítico hacia la cogestión, la reducción del esfuerzo y la provisión de apoyos sociales. A partir del registro de la población objetivo, serán instalados dispositivos de seguimiento a embarcaciones, que permitirán obtener información en tiempo real de las actividades de pesca y zonas de movilización.

Complementario con el uso de la tecnología, el Servicio Nacional de Guardacostas será reforzado con equipamiento para la vigilancia costera en apoyo a los planes nacionales de recuperación y protección de los recursos marino-costeros, dentro de las aguas jurisdiccionales.

Componente 2: Invirtiendo en cadenas de valor para la pesca sostenible.

El componente 2 se enfocará en crear un ambiente propicio para el crecimiento sostenible del sector pesquero mediante inversiones públicas en infraestructura y comercialización dirigidas a generar valor agregado y mejorar el clima de negocios para el sector privado. Las inversiones en infraestructura (terminales pesqueras y centros de acopio) se focalizarán en ampliar la capacidad de descarga y acopio para toda la gama de embarcaciones que descargan recursos pesqueros, con énfasis en aquellas con el mayor potencial económico, junto con la identificación de modelos para diseñar,

construir y operar estos sitios en alianza con el sector privado. Mediante el préstamo, se financiarán 3 terminales pesqueras que serán construidas en Puntarenas Centro, Cuajiniquil (Guanacaste) y Cieneguita (Limón) y plantas de proceso para pescadores y acuicultores de Playas del Coco, Guápiles y San Isidro del Guarco (Cartago), que cuenten con las condiciones de inocuidad y trazabilidad adecuadas para el desarrollo de la comercialización de productos de primera venta, que permita a las organizaciones acopiar y negociar producto al por mayor y a mejores precios directamente con los compradores.

Para obtener mayores beneficios económicos para los pescadores y acuicultores de Costa Rica en un mercado global competitivo, los esfuerzos deben centrarse en la identificación de atributos para reconocer el valor de los productos pesqueros en los mercados nacionales e internacionales. Por lo tanto, el componente se centrará en la creación de un entorno propicio para el crecimiento sostenible en el sector de la pesca mediante el apoyo a la inversión pública en infraestructura y los servicios relacionados con el mercado para estimular la agregación de valor, desarrollar estrategias de mercado y mejorar el clima de negocios para las inversiones del sector privado.

Este componente tendrá dos subcomponentes:

- **Inversiones en infraestructura:** Se trabajará en la identificación, y construcción de infraestructura clave necesaria para incrementar el valor para los pescadores locales en las cadenas de valor y, por lo tanto, aumentar su participación en el precio final al consumidor o en la exportación. Se construirán 3 Terminales Pesqueras ubicadas en Puntarenas, Cuajiniquil (Guanacaste) y Limón; adicionalmente se incluye inversiones en el mejoramiento a la Estación Acuícola Los Diamantes, Guápiles y 3 plantas de proceso en Playas del Coco (Guanacaste), La Rita de Guápiles (Limón) y San Isidro del Guarco (Cartago).
- **Cadena de valor y desarrollo del mercado:** Este subcomponente complementa las inversiones en infraestructura clave mediante planes de acción para el desarrollo de la cadena de valor de especies de interés comercial. Es fundamental la implementación de un sistema

de trazabilidad de productos pesqueros y acuícolas a fin de rastrear y certificar el origen y la legalidad de los productos.

Componente 3: Fortaleciendo los mecanismos de sostenibilidad social y ambiental.

El componente 3 apoyará los esfuerzos del Gobierno en la transición hacia un régimen de gestión pesquera eficiente y efectivo de una manera social y ambientalmente sostenible. El proyecto apoyará a INCOPECA y otras instituciones a fin de brindar oportunidades económicas alternativas para atender las necesidades de ingresos y empleo de sectores que durante la restauración de pesquerías no puedan continuar en la actividad extractiva, a través del entrenamiento, formación técnica, acompañamiento y coordinación interinstitucional.

Esto incluirá el análisis de los programas de apoyo social existentes para el sector pesquero, se apoyará la ampliación de modelos de gestión conjunta de áreas marino-costeras tales como las Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR) y se desarrollará un programa de compensación por afectaciones y costos de oportunidad, incluyendo pilotos de pagos por servicios ambientales azules (por ejemplo, la reducción del esfuerzo pesquero y zonas de no captura), y se apoyará la formación en oportunidades laborales y medios de vida alternativos.

El mismo cuenta con 3 subcomponentes:

3.1. Manejo Participativo de pesquerías y fortalecimiento de capacidades

El manejo participativo se ha implementado en la institución a través de las mesas de diálogo con los diferentes sectores y a través de la zonificación de áreas de pesca bajo el modelo de Áreas Marinas de Pesca Responsable (Decreto Ejecutivo N° 35502-MAG) que se constituyen en áreas con características biológicas, pesqueras o socioculturales importantes, las cuales están delimitadas por coordenadas geográficas y otros mecanismos que permitan identificar sus límites y en las que se regula la actividad pesquera de modo particular para asegurar el aprovechamiento de los recursos

pesqueros a largo plazo, para ello el INCOPECA podrá contar con el apoyo de comunidades costeras y otras instituciones.

Las normas y regulaciones para cada una de las Áreas Marinas de Pesca Responsable se establecen en los Plan de Ordenamiento Pesquero que debe ser realizado por las partes involucradas (pescadores e instituciones gubernamentales) y aprobado por la Junta Directiva del INCOPECA para su implementación.

Para el fortalecimiento de las Áreas Marinas de Pesca Responsable el proyecto considera diferentes actividades de capacitación como: enfoque ecosistémico, manejo de la pesca, capacitación sobre la importancia de la pesca comercial a nivel nacional y el aporte de la pesca artesanal así como capacitación de mercadeo básico, capacitación de técnicas de ventas y servicio al cliente, capacitación en trazabilidad e importancia en comercialización los cuales están considerados en los componentes 2 y 3 del proyecto.

En la coyuntura conocida hasta el momento del sector pesquero y acuícola, los diferentes grupos organizados presentan falencias en relaciones interpersonales limitadas principalmente por las débiles habilidades blandas como comunicación asertiva, inteligencia emocional, resolución de conflictos, liderazgo y trabajo en equipo; además son pocas las organizaciones que cuentan con equipo con algún grado de conocimiento administrativo, lo que repercute en el desarrollo organizacional.

Es por el anterior motivo que las organizaciones del sector pesquero y acuícola de Costa Rica requieren entre otras cosas, un fortalecimiento de habilidades blandas y administrativas como la comercialización, contabilidad básica, manejo de inventarios y aspectos productivos, desarrollados a través de programas de capacitación adecuados a personas adultas, por lo que se considera de menester contar con dicho programa de capacitación y asesoría que facilite el desarrollo organizacional psicopedagógicamente adecuado para esta población.

En apoyo al Plan Nacional de Acción para la pesca de grandes pelágicos, el proyecto contempla la capacitación para establecimiento de cadenas de valor, mercadeo, trazabilidad y comercialización nacional e internacional de grandes pelágicos, con el fin de atender el mercado global de productos

de pesca responsable. Mediante el asesoramiento de consultorías, se pretende posicionar en el mercado nacional e internacional la oferta costarricense de productos sostenibles y de alta calidad de grandes pelágicos como el atún, el dorado o el pez espada, que están demandando productos de pesca sustentable, mediante desarrollo de un sello país, campañas para consumidores y nuevos nichos en mercados para productos con valor agregado.

3.2. Apoyo a oportunidades de empleo y medios de vida alternativos

Por medio de este programa, se financiará capacitaciones y servicios de consultoría para brindar apoyo y acompañamiento a las familias vulnerables para superar las implicaciones económicas y sociales de la transición hacia la gestión sostenible de la actividad, siendo que el ordenamiento y planes de manejo, podrían generar inicialmente una disminución de las capturas y por ende un efecto económico. Se prevén tres actividades principales. Primero, el proyecto financiará el trabajo analítico mediante la actualización del Registro Socioeconómico y Productivo Pesquero y Acuícola, que se ha contemplado en el Componente 1 e incluirá el trabajo cualitativo y cuantitativo para comprender mejor los perfiles de los hogares y los medios de vida (con un enfoque en las oportunidades de los jóvenes como próxima generación). Se efectuará, además, un diagnóstico del mercado laboral de las zonas, para identificar otros sectores con potencial de empleo y que enfrentan riesgos climáticos más bajos. En segundo lugar, el proyecto reforzará los esfuerzos de INCOPECA para apoyar a los pescadores y acuicultores más vulnerables y sus familias que decidan limitar su esfuerzo pesquero o salir del sector, vinculándolos con los programas gubernamentales de apoyo social y de ingresos existentes, los servicios del mercado laboral y la capacitación. Para llevarlo a cabo se trabajará con familias extremadamente pobres, tomando como referencia la experiencia exitosa de la estrategia de reducción de la pobreza extrema “Puente al Desarrollo”, para orientarlos y dirigirlos hacia los programas ya existentes en el Gobierno.

Específicamente, el Proyecto financiará (i) la contratación de una empresa de cogestores sociales para trabajar con familias de pescadores vulnerables, con un enfoque en la generación de medios de vida alternativos y (ii) la provisión de capacitación complementaria, transferencia de conocimientos y asistencia técnica que podría ser necesaria para el direccionamiento hacia los programas gubernamentales existentes. Esta actividad se implementará en estrecha coordinación con el IMAS, el MTSS y el INA basándose en los acuerdos institucionales existentes.

En tercer lugar, el proyecto invertirá en promover la maricultura como un medio de vida alternativo para los pescadores, los trabajadores de los productos del mar y sus familias a través de la asistencia técnica, la realización de actividades piloto destinadas a demostrar la aplicación de técnicas de acuicultura, la investigación y el desarrollo de un plan nacional de ordenamiento espacial de la actividad. El objetivo es desarrollar modelos de negocios de acuicultura competitivos y eficientes en el uso de los recursos que se adapten al cambio climático y que también brinden beneficios colaterales para la mitigación del clima al tiempo que brindan una fuente de medios de vida alternativos para los pescadores vulnerables.

3.3. Incentivos para el manejo sostenible de pesquerías y servicios ecosistémicos

El proyecto contempla un esquema de pagos por servicios ambientales en el ámbito marino-costero (azules) con el objetivo de otorgar incentivos para la transición hacia esquemas de manejo de pesquerías sostenibles y para mantener o mejorar los servicios ecosistémicos del mar y de los recursos marino-costeros.

Para facilitar la operación del piloto y considerando la experiencia generada en el país con esquemas similares, como el Pago por Servicios Ambientales (PSA), en el ámbito terrestre, se ha considerado la posibilidad de que sea administrado a través, por ejemplo, de la Fundación Banco Ambiental (FUNBAM), cuya creación fue referida en la Ley N°8640, artículo 3 (conocido como proyecto Ecomercados). Esta entidad actualmente está encargada de la administración del Fondo de Biodiversidad Sostenible que maneja recursos del Fondo Global Ambiental (GEF).

El piloto de Pago de Servicios Ecosistémicos Marinos (PSEM) otorgará incentivos a personas físicas o jurídicas, incluyendo organizaciones de base local y comunal (asociaciones o cooperativas de pescadores, piangüeros, etc.), organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, y municipalidades. Por ende, el funcionamiento de los incentivos dependerá de la presentación de postulaciones por parte de los interesados.

El proyecto, con recursos del préstamo, contempla la incorporación de recursos que serán asignados como incentivos por el piloto de PSEM y consiste en el financiamiento total o parcial a proyectos con objetivos específicos de mantener y/o conservar los bienes y servicios ecosistémicos del mar, a través de dos modalidades:

(A) consistirá en pagos directos a organizaciones de pescadores para ejecutar acciones contempladas bajo planes de manejo sostenibles de los recursos pesqueros y marino-costeros en un área marina determinada. El pago permitiría compensar a estas comunidades para actividades que permitan mantener o incrementar los servicios ecosistémicos y este esfuerzo adicional (más allá de lo de por sí exigido por la legislación nacional vigente) sería retribuido en la forma de transferencias directas (pagos).

(B) Financiamiento total o parcial a actividades diversas contempladas en subproyectos presentados por los beneficiarios y debidamente aprobadas por el Comité Técnico Asesor.

Se pondrá a prueba la financiación de los contratos de servicios ambientales con los pescadores y las organizaciones de pescadores participantes vinculados a mejoras medibles en la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas marinos, cuidando que los instrumentos proporcionen los incentivos adecuados, sean rentables y generen beneficios ambientales para el país.

Durante los primeros periodos del proyecto también se financiará estudios técnicos y legales para explorar las opciones de implementación de los instrumentos más adecuados, para ayudar a garantizar que las pesquerías continúen administrándose de manera sostenible una vez que las poblaciones se hayan recuperado y frente al cambio climático, recompensando el uso continuo de prácticas de pesca sostenibles y la conservación de los hábitats.

Componente 4: Gestión del Proyecto, Monitoreo y Comunicación.

Este componente proporcionará capacitación, servicios de consultoría y costos operativos para fortalecer la capacidad de INCOPECA para administrar, implementar, monitorear e informar sobre las actividades del proyecto, con recursos del préstamo y aporte institucional. Específicamente, el apoyo incluirá: (i) la contratación transitoria mediante consultoría de un equipo para la coordinación

del proyecto, incluido el establecimiento de sistemas adecuados de gestión financiera y de adquisiciones y auditorías; (ii) establecer herramientas y mecanismos de monitoreo y evaluación con el fin de informar sobre los resultados del proyecto y las estadísticas globales del sector, incluidas las encuestas socioeconómicas periódicas, las encuestas de mercado y las evaluaciones de stock; (iii) preparación e implementación de instrumentos específicos de salvaguardas social y ambiental, exigidos por el Banco Mundial, según el Marco de Gestión Ambiental y Social, el Marco de Planificación de los Pueblos Indígenas y el Marco de Política de Reasentamiento, incluido un Plan de Acción de Género para el sector pesquero y una Estrategia de Afrodescendientes; (iv) la implementación de un plan de comunicación general, que incluye el intercambio de conocimientos y la experiencia adquirida a través del proyecto en relación con la gestión sostenible de la pesca a nivel regional; y (v) apoyo a la coordinación interinstitucional, el diálogo con las partes interesadas y el fortalecimiento del mecanismo de atención de reclamos y consultas.

III. Cobertura del Reasentamiento

El fin de este marco es contribuir con la gestión de parámetros en caso de que alguna actividad del proyecto genere reasentamiento involuntario, restricción del acceso a recursos y posibles escenarios de adquisición de tierras (incluyendo donaciones) que podrían generar efectos adversos a la población local, en los términos definidos por la OP 4.12

Principios:

De conformidad con lo establecido en la política operacional de OP 4.12, así como por las normas de procedimientos del Banco Mundial se establecen los siguientes principios para el proyecto:

1- Generar oportunidades de desarrollo de manera que generen beneficios para la población en general y para las personas afectadas por impactos adversos en particular.

2- Todas las personas afectadas por impactos adversos debido a la implementación de acciones del proyecto tienen derecho a una compensación por los bienes o pérdida de acceso a activos productivos

al costo total de reposición, tal y como lo establece la Ley N°9286 de Expropiaciones y en acuerdo a lo establecido en la OP 4.12

3- Las personas afectadas deben ser consultadas, según corresponda, durante el proceso de elaboración del plan de reasentamiento involuntario y de proceso, y debe darse a conocer públicamente.

4- Las personas afectadas pueden tramitar sus inconformidades a través del mecanismo de queja establecido.

5- Se debe evitar o minimizar el reasentamiento involuntario de las personas donde se estará desarrollando el proyecto.

6- Se ayudará a las personas desplazadas en sus esfuerzos por mejorar sus medios de subsistencia y sus niveles de vida, o al menos devolverles, en términos reales, los niveles que tenían antes de ser desplazados o antes del comienzo de la ejecución del proyecto, cuando sea que presentaban los niveles más altos

IV. Objetivos

1. Contar con una herramienta que permita definir los procedimientos de gestión durante todo el ciclo técnico del proyecto para asegurar un adecuado manejo de los impactos que pudieran darse en el caso en que fuese necesario el desplazamiento de personas, familias o activos.

2. Asegurar la adecuada planeación de todas las etapas del proceso de reasentamiento involuntario de familias, en el caso de presentarse desplazamiento en cualquiera de las intervenciones.

3. Asegurar que se desarrolle un proceso participativo claro y oportuno de las familias afectadas y se garantice la mitigación de impactos negativos, que pudieran derivarse en el caso en que se dé un desplazamiento de familias.

4. Dotar a la institución ejecutora y coejecutoras (si las hubiera) de los elementos necesarios para una adecuada operación de las diversas actividades que deben ejecutarse en posibles reasentamientos, en el marco de las intervenciones de los sub-proyectos (obras estructurales y no estructurales) en las áreas de intervención del proyecto.

5. Asegurar que todas las personas afectadas por impactos adversos debido a la expropiación de sus tierras sean compensadas a través de la determinación del justo precio de reposición del terreno expropiado; y/o a través de medidas de rehabilitación u otras formas de asistencia para mejorar o al menos recuperar sus ingresos y nivel de vida.

V. Marco Legal Nacional / Internacional

Este MPRI se apoya en las normas aplicables de carácter nacional e internacional ratificadas por el Gobierno de la República de Costa Rica, así como en la política de salvaguarda sobre Reasentamiento Involuntario del Banco Mundial, OP 4.12.

- **Constitución Política de la República de Costa Rica**

Costa Rica es un Estado de derecho, la Constitución Política de la República de Costa Rica (7 de noviembre de 1949 y sus reformas) es la norma superior a partir de la cual el ordenamiento jurídico se desarrolla, y consecuentemente, estas iniciativas deben acoplarse.

Dicho documento establece la responsabilidad del Estado para procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza; establece que toda persona tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Artículo50).

- **Tratados internacionales ratificados**

La normativa internacional que ha sido ratificada por el país comprende más de cincuenta Tratados y Convenios Internacionales en materia de ambiente y desarrollo sostenible, Incluyendo instrumentos globales, continentales (en el marco del Sistema Interamericano) y subregionales (en el

marco del Sistema de Integración Centroamericana), en virtud de los cuales el país ha asumido compromisos en materias diversas tales como diversidad biológica, cambio climático, lucha contra la desertificación, bosques, patrimonio natural y cultural, sustancias químicas, protección de la capa de ozono, etc.

Asimismo, parte integral del ordenamiento jurídico nacional son los instrumentos normativos firmados y ratificados por el país en materia de derechos humanos, tanto aquellos que son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como los instrumentos globales, incluyendo los derechos de los trabajadores y los pueblos indígenas negociados en el marco de las Naciones Unidas o la Organización Internacional del Trabajo.

Entre los tratados internacionales ratificados por Costa Rica y que tienen relación con la aplicación del MGAS, están las siguientes:

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada mediante Ley N°6968 de 1984.
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada mediante Ley N° 8557 del 2006.
- Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada mediante Ley N° 3844 de 1967.
- Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, ratificada mediante Ley N° 3844 de 1967.
- Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, ratificado Mediante Ley N° 5980 de 1976.
- Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado mediante Ley N°7416 de1994.
- Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, ratificado Mediante Ley N° 5980 de1976.
- Convenio para la conservación de la biodiversidad y protección de áreas silvestres prioritarias en América Central. Ratificado mediante Ley N°7433 de 1994.
- Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratificado mediante la Ley N° 7414 de 1994.
- Convenio sobre Conservación de Ecosistemas y Plantaciones Forestales, ratificado mediante Ley N° 7572, de octubre 1993.

- Convención de las Naciones Unidas lucha contra la desertificación y la sequía especialmente en África, ratificado mediante Ley N° 7699 de 1997.
- Convenio Centroamericano sobre Cambio Climático, ratificado mediante Ley N° 7513 de 1993.
- Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas "Convención de Ramsar", ratificado mediante Ley N° 7224 de 1991.
- Aprobación de la Adhesión de Costa Rica a la Convención sobre las Especies Migratorias de Animales Silvestres, ratificada mediante Ley N° 8586 del 2007.
- Declaración de los Derechos Humanos de ONU: Artículo 17.
- Convención Americana Sobre Derechos Humanos: Artículo 21

- **Ley N° 9286 de Expropiaciones del 4 de febrero del 2015.**

Esta Ley regula la expropiación forzosa por causa de interés público legalmente comprobado. La expropiación se acuerda en ejercicio del poder de imperio de la Administración Pública y comprende cualquier forma de privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera sus titulares, mediante el pago previo de una indemnización que represente el precio justo de lo expropiado (Art. 1).

En el tema de expropiaciones, esta Ley establece entre otros las disposiciones generales (Cap. I), los procedimientos administrativos (Cap. II), el proceso especial de expropiación (Cap. III); las modalidades de indemnización (Cap. IV).

Por otra parte, en el caso de reasentamiento involuntario es necesario diferenciar el Reasentamiento dentro de territorios indígenas y fuera de territorios indígenas, pero dentro de áreas silvestres protegidas, ya que existen algunas diferencias en cuanto a la normativa a aplicar.

- Territorios Indígenas

En el caso de estos territorios, el artículo 3 de la Ley Indígena N° 6172 de 29/11/1977, establece que las reservas indígenas son "...inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. "No obstante lo anterior, regula el caso de las

personas no indígenas que Sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de dichos territorios, determinando que el ITCO (hoy INDER) debe reubicarlas en tierras similares si así ellos lo desean, o bien expropiarlas e indemnizarlas de conformidad con lo que señala la Ley N°9286 de expropiaciones de Costa Rica de 04/02/15. Asimismo, estipula que los trámites de expropiación estarán a cargo del ITCO (hoy INDER) en coordinación con CONAI. Además de lo señalado en esta ley, cobran igualmente importancia, los decretos mediante los cuales han sido creados o ampliados algunos territorios indígenas.

Además de lo establecido en la legislación mencionada, es de resaltar la Ley número 7316 de 4/12/92 que corresponde al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene un rango superior a la legislación común, el cual también se refiere al tema, establece en su artículo 13, que los Gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas tiene su relación con la tierra o territorios, y en el artículo 14, inciso 2), señala que: “2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para Solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.”

- **Ley No. 5251 para la Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) de 1973.**

Esta ley crea la CONAI y entre los principales objetivos que tiene esta institución es promover el mejoramiento social, económico y cultural de la población indígena; servir de instrumento de coordinación entre las distintas instituciones públicas obligadas a la ejecución de obras y a la prestación de servicios en beneficio de las comunidades indígenas; velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas, estimulando la acción del Estado a fin de garantizar es estas poblaciones la propiedad individual y colectiva de la tierra; velar por el cumplimiento de cualquier disposición legal actual o futura para la Protección del patrimonio cultural indígena, colaborando con las instituciones encargadas de estos aspectos; crear consejos locales de administración para resolver en principio los múltiples problemas de las localidades indígenas; y servir de órgano oficial de enlace con el Instituto

Indigenista Interamericano y con las demás agencias internacionales que laboren en este campo (artículo 4).

- **Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2013 a 2030 y su Plan de Acción:**

El objetivo de la Política es minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas que serán afectadas por la construcción del proyecto, evitando o disminuyendo la necesidad de desplazamiento físico, y asegurando que, en caso de ser necesario el desplazamiento, las personas sean tratadas en forma equitativa, y cuando se factible, participen de los beneficios que ofrece el proyecto que requiere su reasentamiento.

- **Política OP 4.12 del Banco Mundial**

La política operativa del Banco Mundial, OP.4.12 “Reasentamiento involuntario” establece las medidas apropiadas se planifiquen y se lleven a cabo meticulosamente, los reasentamientos involuntarios pueden provocar penurias graves y prolongadas, empobrecimiento y daños al medio ambiente. Esta complementa las acciones establecidas en la legislación nacional con actividades adicionales y tiene una perspectiva amplia y abarca los distintos efectos económicos y sociales directos resultantes de los proyectos de inversión financiados por el Banco y causados por:

a) La privación involuntaria de tierras (que comprende todo lo que crece en la tierra o está permanentemente incorporado a la tierra, como las construcciones y los cultivos), que da por resultado:

- i) El desplazamiento o la pérdida de la vivienda;
- ii) La pérdida de los activos o del acceso a los activos, o
- iii) La pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no, o

b) La restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como parques o zonas protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas desplazadas. Sin embargo, esta política no se aplica a la reglamentación de los recursos naturales en los niveles nacional o regional para promover su sustentabilidad, como la gestión de las cuencas hidrográficas, las aguas subterráneas, y las pesquerías.

Los proyectos financiados por el Banco Mundial que comprendan múltiples subproyectos que puedan entrañar reasentamiento involuntario, el Banco exigirá que se le presente, antes de la evaluación inicial del proyecto, un proyecto de plan de reasentamiento que se ajuste a la presente política a menos que, debido a la naturaleza y el diseño del proyecto o de uno o más subproyectos determinados:

- a) La zona de impacto de los subproyectos no se pueda determinar.
- b) La zona de impacto se conozca, pero no se pueda determinar con precisión la demarcación del sitio como es el caso del presente proyecto, que a pesar que se tiene claro el tipo de infraestructura que se pretende construir, aún no se han determinado los sitio, para ello se estar contando con el apoyo del Ministerio de Planificación y Política Económica MIDEPLAN.

VI. Territorios Pesquero y Acuícolas

La mayor parte de la economía costera de Costa Rica está sustentada en actividades relacionadas con la pesca y en un menor grado con proyectos acuícolas (maricultura).

Sin embargo, el país carece de infraestructura pública apropiada que permia realizar una manipulación de los productos provenientes de las actividades pesqueras y acuícolas en condiciones de higiene, calidad e inocuidad adecuadas para el consumo humano y comercialización. Situación que pone al consumidor en situaciones vulnerables para su salud y al productor en una clara desventaja competitiva, forzándolo en muchas ocasiones a recurrir a intermediarios que obtienen los mayores beneficios económicos.

La propuesta del Gobierno de Costa Rica con el apoyo de Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPECA al Banco Mundial, pretende el fortalecimiento de la infraestructura pesquera en diferentes regiones del país. Y para ello se propone la construcción de plantas procesadoras de Recibo y Terminales Pesqueras en diferentes regiones.

Es importantes indicar que para definir los sitios donde se estará construyendo la infraestructura pesquera, el INCOPECA con el apoyo del Ministerio de Planificación y Política Económica, MIDEPLAN, realizarán los estudios necesarios de factibilidad que permitirán definir los sitios y si

posibles reasentamientos, fundamentalmente por la zona costera del Pacífico y en menor cantidad en el Caribe



Fuente: INCOPESCA, 2018.

No podemos dejar de mencionar que la acuicultura en los últimos años ha adquirido mayor relevancia, no solo como una alternativa de producción de proteína, sino también desde el punto de vista empresarial, principalmente la continental con cultivos de trucha y tilapia, aunque la maricultura se ha visto fortalecida en diferentes regiones con el cultivo de ostras y pargo en jaulas.



Fuente: INCOPESCA, 2018.

Proyecto de Acuicultura Continental en Costa Rica.

Por lo tanto, la infraestructura pesquera y acuícola que se pretende construir en diferentes regiones del país permitirá:

- Dotar de condiciones físicas, higiénicas, estructurales, jurídicas y técnicas, para la manipulación y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.
- Integrar otras actividades económicas de las zonas donde se construyan los puestos de recibo y/o terminales pesqueras.
- Mejorar la organización de los pescadores / acuicultores para facilitar el abastecimiento de producto en los mercados nacional e internacionales.
- Registrar información de estadísticas pesqueras, precios, volúmenes, especies, productores y comercializadores.

VII. Acciones del Proyecto que Pueden Generar Reasentamiento Involuntario.

Componente	Actividad	Posible generación de Reasentamiento Involuntario / Desplazamiento económico
Componente 1: Fortalecimiento de la Gobernanza y el Manejo de los Recursos Pesqueros	Apoyará esfuerzos orientados a la asistencia legal para actualizar la normatividad del sector pesquero y acuícola, fortalecimiento institucional, actualización del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola, instalación de un Sistema Integrado de Información Pesquera y monitoreo de embarcaciones para el control y vigilancia.	La política OP 4.12 no se aplica a la reglamentación de los recursos naturales en los niveles nacional o regional para promover su sustentabilidad, como la gestión de las cuencas hidrográficas, las aguas subterráneas, las pesquerías, etc.
Componente 2: Desarrollo de la Economía Azul	Se enfocará en crear un ambiente propicio para el crecimiento sostenible del sector pesquero mediante inversiones públicas en infraestructura pesquera y comercialización dirigidas a generar	De conformidad con el estudio de prefactibilidad elaborado se ha determinado que no se realizarán reasentamientos involuntarios para el desarrollo de infraestructura.

	valor agregado y mejorar el clima de negocios para el sector privado.	Si se seleccionara otra nueva obra de infraestructura a realizar mediante este componente (Puestos de Recibo y Terminales Pesqueras) tienen el potencial de generar situaciones de reasentamiento involuntario.
Componente 3: Sostenibilidad Social y Ambiental	Apoyará los esfuerzos hacia un régimen de gestión pesquera eficiente y efectivo de una manera social y ambientalmente sostenible, incluyendo ampliación del modelo de gestión conjunta de áreas marino-costeras tales como las Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR).	La política OP 4.12 no se aplica a la reglamentación de los recursos naturales en los niveles nacional o regional para promover su sustentabilidad, como la gestión de las cuencas hidrográficas, las aguas subterráneas, las pesquerías, etc. No se realizarán reasentamiento involuntarios. La reducción del esfuerzo pesquero puede ser decidida de forma voluntaria por la comunidad. Para compensar la posible pérdida temporal de ingresos debido a la reducción del esfuerzo pesquero, el proyecto incluye medidas como el apoyo al acceso a los programas sociales existentes, al mercado laboral, y a los programas y servicios educativos.

Fuente: Elaboración propia. INCOPECA, 2018.

VIII. Marco de Política de Reasentamiento Involuntario

El Marco de Política de Reasentamiento Involuntario se fundamenta en los siguientes valores:

1. Principios Rectores

- Evitar o minimizar el desplazamiento físico y/o económico debido a la liberación del derecho de vía para la construcción de obras de infraestructura pesquera y acuícola.
- Asistir a los afectados para restituir sus medios de vida a un nivel similar al disfrutado antes del desplazamiento o antes del comienzo de la ejecución del proyecto y de ser posible a un nivel mejor, tal y como lo establece la política OP 4.12 del Banco Mundial.
- Reconocer explícitamente que el impacto social del desplazamiento físico y/o económico conlleva un alto riesgo de empobrecimiento para los afectados más vulnerables.
- Ofrecerle a los afectados la oportunidad de elegir entre varias opciones para restituir los medios de vida.
- Mantener transparencia en la divulgación de información sobre las políticas, las opciones para restitución del medio de vida disponibles, el cronograma de actividades y el mecanismo de atención de quejas y consultas.
- Asegurar el derecho de participación del afectado en la toma de decisiones sobre su futuro.
- Capacitar a los funcionarios del INCOPECA involucrados en la toma de decisiones y la ejecución de los procesos relacionados con el desplazamiento, la adquisición de terrenos y el diseño e implementación de los PRI para que entiendan el reasentamiento involuntario como una oportunidad de desarrollo cuyo objetivo es replicar o mejorar las condiciones de vida de los afectados más vulnerables.

2. Criterios de Vulnerabilidad / Socio-Económico

Alta Vulnerabilidad

- Las personas dependen económicamente del predio y/o estructura.
- Pérdida parcial pero significativa para la seguridad socio-económica del afectado.
- Las personas no cuentan con ingresos adicionales.
- Las personas cuentan con un bajo nivel de educación y capacitación.

- Son madres solteras y personas de la tercera edad.
- Son personas Indígenas.
- Son personas Afrodescendientes.
- Son personas con discapacidad o enfermedades crónicas.

Vulnerabilidad media

- Depende del predio y/o estructura considerando que menos de 10% es marginal según P.O.4.12
- Las personas tienen otras actividades socio-económicas adecuadas para sostener el medio de vida.
- Las personas cuentan con escolaridad y baja capacidad técnica.

No Vulnerable

- No usa el predio y/o estructura para fines productivos.
- Las personas usan el predio para fines productivos, pero tienen capacidad para continuar con su actividad en otro lugar.
- Las personas usan el predio para fines productivos, pero no depende económicamente de él.
- Las personas tienen fuentes de ingreso adicionales significativas.
- Las personas no residen, trabajan, o producen en la zona afectada.

3. Identificación de Impactos.

Se realizarán los estudios socio-económicos en el campo, requeridos para determinar y dimensionar los impactos, así como realizar un censo de personas y bienes inmuebles afectados.

4. Elegibilidad y compensación de los afectados

Los criterios para la determinación de elegibilidad y compensación serán definidos por:

- a) Aquellos que tienen derechos legales oficialmente establecidos respecto de las tierras (incluso derechos consuetudinarios y tradicionales reconocidos en la legislación del país).
- b) Los que carecen de un derecho legal o una pretensión reconocibles respecto de la tierra que ocupan.

Todas las personas afectadas, serán elegibles para recibir beneficios de reasentamiento en base a las afectaciones, y la falta de un título de propiedad no se constituirá como un obstáculo para ser beneficiarios. En el caso de aquellas personas expropiadas, son elegibles para la compensación económica de acuerdo con la normativa nacional.

Según la Ley N°9286 de Expropiaciones, *“La expropiación se acuerda en Ejercicio del poder de imperio de la Administración Pública y comprende cualquier forma de privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, Cualesquiera sean sus titulares, mediante el pago previo de una indemnización que represente el precio justo de lo expropiado” (Artículo 1). Con respecto a los intereses de la persona afectada esta Ley menciona: “La administración estará obligada a reconocer intereses al expropiado, de oficio ya la tasa legal vigente, a partir de la desposesión del bien y hasta el pago efectivo. Cuando exista un depósito del avalúo administrativo, los intereses se calcularán sobre la diferencia entre este y el justiprecio”.* (Artículo11).

Para la determinación del Justo Precio, según la mencionada Ley se realizarán los siguientes procedimientos (Capítulo III):

1. Solicitud del avalúo de la propiedad.
2. Determinación del justo precio: El avalúo administrativo deberá indicar todos los datos necesarios para valorar el bien que se expropia y describirá, en forma amplia y detallada, el método empleado.
 - En cuanto a los inmuebles, el dictamen contendrá obligatoriamente una mención clara y pormenorizada de lo siguiente:
 - a) La descripción topográfica del terreno.
 - b) El estado y uso actual de las construcciones.
 - c) El uso actual del terreno.
 - d) Los derechos de inquilinos o arrendatarios.
 - e) Las licencia o los derechos comerciales si procedieran conforme a la ley, incluidos, entre otros, todos los costos de producción, directos e indirectos, impuestos nacionales. Municipales y seguros.
 - f) Los permisos y las licencias o las concesiones para la explotación de yacimientos, debidamente aprobados y vigentes conforme a la ley, tomando en cuenta, entre otros, los costos de producción, directos e indirectos, el pago de las cargas sociales, los impuestos nacionales, municipales y los seguros.

g) El precio estimado de las propiedades colindantes y de otras propiedades de la zona o el de las ventas efectuadas en el área, sobre todo si se tratara de una carretera u otro proyecto similar al de la parte de la propiedad valorada, para comparar los precios del entorno con el de la propiedad que se expropia, así como para obtener un valor homogéneo y usual conforme a la zona.

h) Los gravámenes que pesan sobre la propiedad y el valor del bien, fijado por el propietario para estas transacciones.

i) Cualesquiera otros elementos o derechos susceptibles de valoración e indemnización.

- Cuando se trate de zonas rurales, extensiones considerables o ambas, el precio se fijará por hectárea. En caso de zonas urbanas, áreas menores o ambas, el precio podrá fijarse por metro cuadrado.

- En cualquier momento del proceso, la administración expropiante, el propietario o el juez podrán pedir opiniones técnicas a la Dirección General de Tributación, que podrá elaborar estudios de campo, si se estimara necesario. Esta opinión será rendida en el plazo de cinco días hábiles a partir de recibida la petición.

- Para fijar el valor del bien, se considerarán solo los daños reales permanentes, pero no se incluirán ni se tomarán en cuenta los hechos futuros ni las expectativas de derecho. Tampoco podrán reconocerse plusvalías derivadas del proyecto que origina la expropiación.

- En el caso de los bienes muebles, cada uno se valorará separadamente y se indicarán las características que influyen en su valoración.

3. Revisión del avalúo administrativo

4. Fijación de valores

5. Notificación del avalúo

6. Arbitraje

Según la legislación nacional, el pago del justo precio se hará...“en dinero efectivo, salvo que el expropiado lo acepte en títulos valores. En este caso, los títulos se tomarán por su valor real, que será certificado por la Bolsa Nacional de Valores, por medio de sus agentes o, en su defecto por un corredor jurado...” (Artículo45).

Cabe aclarar que, en tanto la OP 4.12 requiere que al considerar el costo de reposición no debe tomarse en cuenta la depreciación de las estructuras ni de los bienes, la compensación se complementará con las medidas adicionales necesarias para cumplir la norma sobre “costo de reposición”¹.

En cuanto a la reubicación del expropiado, la ley estipula...“A título de indemnización y por así acordarlo con el expropiado, la administración expropiadora podrá reubicar al Expropiado en condiciones similares a las disfrutadas antes de la expropiación.” (Art.49). “Cuando para realizar una obra de utilidad o interés público sea necesario trasladar poblaciones, el Poder Ejecutivo o la administración expropiadora coordinará la reubicación respectiva. Los entes y las dependencias que deban participar en la ejecución del respectivo proyecto incluirán, en sus presupuestos, las partidas complementarias requeridas para prestar sus servicios. Además, deberán velar porque se cumpla con las normas técnicas en la instalación y el funcionamiento de los servicios.” (Art. 50). Cuando el administrado considere que el inmueble donde se le reubicó es de condición inferior al que ocupaba antes, podrá recurrir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para que se resuelvan sus pretensiones siguiéndose, en cuanto sea compatible, el procedimiento que esta ley establece para las diligencias judiciales de expropiación.”(Art.51).

La elegibilidad de los afectados se define mediante el censo y registro de la población afectada por el proyecto. El censo de los afectados definirá una fecha de corte. El uso del censo permitirá evitar la potencial exclusión de personas que no cuenten con títulos de propiedad, ya que la política 4.12 del Banco establece que la falta de un título de propiedad no deberá ser un impedimento para que las personas afectadas sean sujetas a las medidas de mitigación definidas en función al tipo y la magnitud de las afectaciones.

Las medidas de mitigación deberán ser de conformidad y proporcionales a los daños o afectaciones que pueda generar el proyecto, estas pueden ser totales o parciales, temporales o permanentes,

¹ El “costo de reposición” es el método de valoración de activos que ayuda a determinar la cantidad suficiente para reponer los activos perdidos y cubrir los costos de transacción. Al aplicar este método de valoración, no debe tenerse en cuenta la depreciación de las estructuras ni de los bienes. En los casos en que el derecho interno no prevea una norma sobre compensación del costo total de reposición, la compensación que permita el derecho interno se complementará con las medidas adicionales necesarias para cumplir la norma sobre costo de reposición. Dicha asistencia adicional se proporcionará de forma separada de la asistencia para reasentamiento que se ha de proporcionar.

según sea el caso. Las medidas de mitigación deberían tener la capacidad de restaurar las condiciones de vida y las afectaciones a condiciones similares o mejores. Sin embargo, en el caso específico del desplazamiento de personas de sus viviendas, se priorizará la reposición física de viviendas, las cuales deberán contar con acceso a servicios básicos y de infraestructura pública y comunitaria que permita restaurar los medios de vida. En los casos en que la medida de mitigación sea la compensación en efectivo, dichas compensaciones deberían tomar en cuenta valores de mercado y adicionar los costos transaccionales (costos de trámites administrativos, traslado logístico, impuestos, inflación, etc.). Estos criterios se deben tomar en consideración tanto para las compensaciones en efectivo como para las compensaciones en especie, según sea necesario. Además, se debe describir (en el caso que se presentaran) otros tipos de asistencia que el proyecto pueda dar (v.g. infraestructura auxiliar o instalaciones complementarias), por ejemplo: construcción de caminos de acceso, abasteciendo de agua potable y saneamiento, energía eléctrica, etc.

El equipo a cargo de la implementación de los planes de reasentamiento involuntario analizará los montos producidos según la metodología propuesta, y en caso que los montos producidos no permitan lograr un valor de reposición a iguales o mejores condiciones, más los costos transaccionales necesarios como parte del proceso de restauración de las afectaciones, se ajustaran los montos de compensación de manera que sean suficientes para cumplir con los estándares definidos por la política de reasentamiento involuntario (OP 4.12) del Banco Mundial.

Los potenciales tipos de afectaciones a las personas afectadas por el proyecto (PAP) y las medidas de mitigación correspondientes se resumen a continuación:

MATRIZ DE AFECTACIONES Y MEDIDAS DE MITIGACION			
Potenciales Áreas de Afectación	Tipos de Afectaciones	Afectados	Medidas de Mitigación
Adquisición de tierras	Pérdida total de la tierra (residencial)	a) Usuario legal/legalizable de la tierra afectada por el proyecto.	Tienen derecho a una indemnización al 100% del costo de reemplazo de la tierra perdida (valor de

MATRIZ DE AFECTACIONES Y MEDIDAS DE MITIGACION			
Potenciales Áreas de Afectación	Tipos de Afectaciones	Afectados	Medidas de Mitigación
			mercado + costos de transacción). Reciben una parcela de tierra de similar productividad/área como la parcela perdida en el área de reasentamiento. Título que se dará conjuntamente a ambos jefes de familia.
		b) Usuario no legal sin derecho de uso de la tierra (ocupantes ilegales, usurpadores).	Tienen derecho a la asistencia de rehabilitación para la tierra al 60% del costo de reemplazo de la tierra ocupada o tienen derecho al apoyo de un programa de asistencia que les dé seguridad de tenencia y les permita mejorar sus niveles de vida
		c) Usuario de la tierra en disputa.	Tienen derecho a compensación de efectivo y/o asistencia de rehabilitación para la tierra de 60% a 100% del costo de reemplazo de la tierra perdida dependiente de la resolución. Puede no ser elegible para compensación inmediata hasta que se resuelva la disputa (la cantidad será depositada en una cuenta bancaria que genere intereses más 10%).
		a) Usuario legal/legalizable de la	Tienen derecho a una indemnización al 100% del

MATRIZ DE AFECTACIONES Y MEDIDAS DE MITIGACION			
Potenciales Áreas de Afectación	Tipos de Afectaciones	Afectados	Medidas de Mitigación
	Pérdida parcial de la tierra residencial	tierra afectada por el proyecto.	<p>costo de reemplazo de la tierra perdida (valor de mercado + costos de transacción).</p> <p>Reciben un terreno de productividad/área similar como la parcela perdida en el área de reasentamiento. Título que se concederá conjuntamente a ambos jefes de familia.</p> <p>Compensación económica por la utilización de las tierras.</p>
		b) Usuario no legal sin derecho a uso de la tierra	Tienen derecho a la asistencia de rehabilitación para la tierra en el 60% del costo de reemplazo de la tierra ocupada y hasta el 100% si proporciona la fuente principal de ingresos.
		c) Usuario de la tierra en disputa	Tienen derecho a compensación de efectivo y/o asistencia de rehabilitación para la tierra de 60% a 100% del costo de reemplazo de la tierra perdida dependiente de la resolución. Puede no ser elegible para compensación inmediata hasta que se resuelva la disputa (la cantidad será depositada en una cuenta bancaria).

MATRIZ DE AFECTACIONES Y MEDIDAS DE MITIGACION

Potenciales Áreas de Afectación	Tipos de Afectaciones	Afectados	Medidas de Mitigación
	Pérdida permanente de la tierra (producción/residencial): menos del 20% de la tierra.	a) Usuario legal/legalizable de la tierra afectada por el proyecto.	Tienen derecho a una indemnización al 100% del costo de reemplazo de la tierra perdida (valor de mercado + costos de transacción). Opción a considerar como pérdida total de la tierra si el resto de la tierra no es económicamente viable.
		b) Usuario no legal sin derecho a uso de la tierra.	Tienen derecho a compensación en efectivo y/o asistencia de rehabilitación para la tierra al 60% del costo de reemplazo de la tierra perdida.
		c) Usuario de la tierra en disputa	Tienen derecho a compensación de efectivo y/o asistencia de rehabilitación para la tierra de 60% a 100% del costo de reemplazo de la tierra perdida dependiente de la resolución. Puede no ser elegible para compensación inmediata hasta que se resuelva la disputa (el monto será depositado en una cuenta)
	Pérdida temporal de la tierra (residencial)	Usuario legal/legalizable de la tierra afectada por el proyecto.	Indemnización por adquisición temporal de tierras basada en la producción anual de la tierra arrendada más los costos

MATRIZ DE AFECTACIONES Y MEDIDAS DE MITIGACION			
Potenciales Áreas de Afectación	Tipos de Afectaciones	Afectados	Medidas de Mitigación
			<p>asociados con la preparación de la tierra y el re-cultivo</p> <p>Contratista arrendará la tierra requerida temporalmente con base a un acuerdo voluntario. Propietario tendrá derecho a rechazar la oferta. El período máximo de uso se define como 2 años. Las tasas de arrendamiento pagado no deben ser menores que el arrendamiento en la actualidad con tarifas de mercado</p>
	Pérdida temporal de la tierra (producción)	Usuario legal/legalizable de la tierra afectada por el proyecto.	<p>Disposiciones que deben adoptarse para la vivienda temporal</p> <p>Asistencia financiera concedida dando el apoyo de alquiler necesario para el alojamiento temporal</p> <p>Contratista arrendará la tierra requerida temporalmente durante la construcción con acuerdo voluntario. Propietario tendrá derecho a rechazar la oferta. El período máximo de uso se define como 2 años. Las tasas de arrendamiento pagado no deben ser menor que el arrendamiento en la</p>

MATRIZ DE AFECTACIONES Y MEDIDAS DE MITIGACION			
Potenciales Áreas de Afectación	Tipos de Afectaciones	Afectados	Medidas de Mitigación
			actualidad con tarifas de mercado
Edificios/estructuras	Pérdida de viviendas	a) Propietario legal/legalizable y no legal de las casas afectadas (habitantes formales e informales)	<p>Tienen derecho a una reposición de vivienda, indemnización económica, o asistencia de rehabilitación al 100% del costo de sustitución de la casa afectada. Ninguna deducción será hecha para la depreciación o los materiales que se pueden recuperar de la construcción. Asistencia para la adquisición de mano de obra y material para la construcción de vivienda nueva con seguridad de tenencia.</p> <p>Reposición de vivienda (con la seguridad de la tenencia) y compensación económica por la transición en áreas más densamente poblada. Se priorizará la reposición física de viviendas, las cuales deberán contar con acceso a servicios básicos</p> <p>Indemnización por reconstrucción o reconexión al abastecimiento de agua/saneamiento y electricidad (infraestructura previa). En los casos en que la medida de mitigación sea la compensación en efectivo,</p>

MATRIZ DE AFECTACIONES Y MEDIDAS DE MITIGACION

Potenciales Áreas de Afectación	Tipos de Afectaciones	Afectados	Medidas de Mitigación
			<p>dichas compensaciones deberían tomar en cuenta valores de mercado y adicionar los costos transaccionales (costos de trámites administrativos, traslado logístico, impuestos, inflación, etc.).</p> <p>Nota: Las medidas de mitigación deberían tener la capacidad de restaurar las condiciones de vida y las afectaciones a condiciones similares o mejores.</p>
		(b) inquilino/Arrendatario	No elegible para indemnización por la casa. Será informado por lo menos 90 días por adelantado para reubicarse y para recibir el equivalente del alquiler por 12 meses.
	Pérdida de estructuras (producción, graneros, irrigación, vallas)	Titulares legales/legalizables y no jurídicos de las estructuras afectadas	Tienen derecho a una reposición, indemnización o asistencia de rehabilitación al 100% del costo de sustitución de la casa y estructura afectada en materiales, efectivo o una combinación de ambos. Ninguna deducción será hecha para la depreciación o los materiales que se recuperen. Asistencia para la adquisición de mano de obra y material para la

MATRIZ DE AFECTACIONES Y MEDIDAS DE MITIGACION

Potenciales Áreas de Afectación	Tipos de Afectaciones	Afectados	Medidas de Mitigación
			construcción de nuevas estructuras.
Pérdida de ingresos/medios de subsistencia	Pérdida de cultivos	Todos elegibles independientemente de su estatus legal (incluyen , arrendatarios, ocupantes ilegales)	Tienen derecho a una compensación de efectivo al 100% a precio de mercado para los cultivos que no fueron cosechados basado en el promedio de los tres años anteriores valor de producción. La pérdida de cosechas se minimizará evitando la adquisición durante la cosecha.
	Pérdida de árboles	Todos los elegibles independientemente de su estatus legal (incluyen aparceros, arrendatarios, ocupantes ilegales)	Tienen derecho a una compensación en efectivo al 100% del costo de sustitución de árboles de fruta perdidos o árboles perdidos de valor comercial a tarifa de mercado en base al tipo, edad y la vida productiva de los árboles.
	Negocios/empleo	Empresario	Impacto permanente: Indemnización en efectivo de 1 año de ingresos netos; Impacto temporal: Indemnización en efectivo de los ingresos netos por meses de suspensión de negocios (hasta un máximo de 3 meses). La evaluación se basará en la declaración de impuestos o, en su ausencia, la

MATRIZ DE AFECTACIONES Y MEDIDAS DE MITIGACION			
Potenciales Áreas de Afectación	Tipos de Afectaciones	Afectados	Medidas de Mitigación
			mediana de los ingresos netos del mercado de negocios similares o en su ausencia, los ingresos mínimos de subsistencia.
		Trabajadores/empleados	Indemnización por salarios perdidos igual a 3 meses de ingresos mínimos de subsistencia y capacitación laboral o apoyo para buscar nuevo empleo
	Bono	Elegible para mudanza que se reubican a tiempo como incentivo para evitar demoras	Tienen derecho a una bonificación en efectivo
	Pagos suplementarios a personas vulnerables (ancianos, personas con discapacidad, hogares mono-parentales, minorías étnicas)	Todos los elegibles	12 meses salario mínimo. Prioridad de empleo en puestos de trabajo relacionados con proyectos. Fondo de jubilación La reubicación de población indígena no es elegible

MATRIZ DE AFECTACIONES Y MEDIDAS DE MITIGACION			
Potenciales Áreas de Afectación	Tipos de Afectaciones	Afectados	Medidas de Mitigación
Infraestructura social y/o comunitaria	Pérdida de infraestructura social	Comunidad (Albergues, Salones comunales, casas de asistencia y ayuda social)	<p>Asignación de tierras para la reconstrucción de infraestructura públicas/comunitarias.</p> <p>Reposición de la infraestructura afectada, en base a diseños previamente validados por la comunidad afectada.</p> <p>Compensación económica, incluyendo mano de obra, material, y costos de construcción, considerando las necesidades de los grupos vulnerables</p>

Fuente: INCOPECA, 2018.

Nota: Las medidas de mitigación tendrán la capacidad de restaurar las condiciones de vida y las afectaciones a condiciones similares o mejores.

IX. Lineamiento para la Preparación de Planes de Reasentamiento.

En caso que durante la ejecución del proyecto se identifiquen afectaciones por reasentamiento, se deberán preparar Planes de Reasentamiento Involuntario específicos para mitigar las afectaciones, tomando en cuenta un criterio de proporcionalidad, pero de manera consistente con lo establecido en la política OP 4.12 del Banco Mundial. Uno de los elementos clave de dicha política es la preparación de planes de reasentamiento.

El alcance de los planes de reasentamiento deberá ser proporcional a la magnitud e intensidad de las afectaciones, y el nivel de vulnerabilidad de los afectados.

La política OP 4.12 también establece que en ciertas circunstancias se podrían preparar planes de reasentamiento abreviados, en los casos en que los efectos en la totalidad de la población desplazada o afectadas sean mínimos. Por ejemplo, si las personas afectadas no resultan desplazadas físicamente y pierden menos del 10% de sus activos productivos. Otro escenario es si el número de personas desplazadas es inferior a 200 y no son personas vulnerables, hay un mercado que permite reponer los bienes afectados, y los afectados poseen títulos de propiedad. En estos casos se podrá acordar que un plan de reasentamiento abreviado sería suficiente, previo acuerdo del Prestatario con el Banco.

- Preparación del Plan de Reasentamiento Involuntario

El equipo técnico encargado del seguimiento del MGAS en el INCOPECA para el Plan de Reasentamiento Involuntario, tendrá que realizar las gestiones administrativas para la contratación de un especialista que defina entre otras, el impacto sobre la adquisición de tierras y el correspondiente reasentamiento Involuntario o donación de tierras, basado en el número estimado de personas y el tamaño de terrenos afectados; asimismo se deberán definir las Instituciones gubernamentales involucradas e instrumentos a utilizar como los del Banco derivados de la OP.412, que son el Plan de Reasentamiento y el Plan de Reasentamiento Abreviado.

- Plan de Reasentamiento Involuntario

El Plan de Reasentamiento Involuntario se requiere cuando la adquisición de tierras afecta a más de 200 personas, las personas afectadas pierden más del 10% de sus bienes productivos y/o necesiten de una reubicación física, existan personas vulnerables entre los afectados, haya un mercado fluido que permita reponer los bienes afectados, existen experiencia previa de ejecución de planes de reasentamiento bajo estándares internacionales, y los afectados poseen títulos de propiedad. En este caso, el plan abarcará también un estudio socioeconómico y medidas de restablecimiento de los ingresos. Los detalles acerca del contenido de los planes de reasentamiento se encuentran en el Anexo

- Plan de Reasentamiento Involuntario abreviado

La política OP 4.12 también establece que en ciertas circunstancias se podrían preparar planes de reasentamiento abreviados, cuyos contenidos se encuentran en el Anexo 2. Mayores detalles se encuentran en la política OP 4.12. Se podría preparar un plan abreviado si los casos en que los efectos en la totalidad de la población desplazada o afectadas sean mínimos. Por ejemplo, si las personas afectadas no resultan desplazadas físicamente y pierden menos del 10% de sus activos productivos. Otro escenario es si el número de personas desplazadas es inferior a 200 y no son personas vulnerables, hay un mercado que permite reponer los bienes afectados, y los afectados poseen títulos de propiedad. En estos casos se podrá acordar que un plan de reasentamiento abreviado sería suficiente.

Se recalca que para el caso de Costa Rica existe una legislación muy completa sobre el tema de Expropiaciones Ley N°9286 del 04/02/15. Seguidamente se indica la estructura de los Planes de Reasentamiento Involuntario que comprenderá como mínimo, los elementos siguientes:

- Un censo de las personas desplazadas y la valoración de los activos.
- Una descripción de la compensación y otro tipo de asistencia para el reasentamiento que se ha de proporcionar.
- La celebración de consultas con las personas desplazadas sobre alternativas aceptables.
- Responsabilidad institucional por la ejecución y los procedimientos para la compensación de las reclamaciones.
- Disposiciones sobre seguimiento y evaluación.
- Calendario y presupuesto.

Asimismo, es importante indicar que en el marco del proceso de aprobación de proyecto no se desplazará (física o económicamente) y no se iniciarán obras hasta que se haya finalizado el proceso de reasentamiento y se haya pagado 100% de la compensación.

Detalles de responsabilidades

En cualquier caso, todas las medidas, subproyectos y/o acciones del Proyecto que supongan reasentamiento involuntario en los términos de la OP 4.12, INCOPECA presentará al Banco Mundial el instrumento de reasentamiento pertinente que se ajuste a este Marco y por consiguiente a la OP

4.12, y lo pondrá a disposición de las personas desplazadas en un lugar accesible para éstas en una forma e idioma que les resulten comprensibles. Una vez que el Banco Mundial acepte el instrumento de reasentamiento, lo pondrá a disposición del público.

Para la ejecución de las acciones derivadas del marco de reasentamientos, el INCOPECA apoyará con personal institucional y pondrá a disposición del proyecto la flota vehicular y marítima, y asignará al personal que resulte necesario para su implementación.

Etapas y responsables para la implementación de los Planes de Reasentamiento (PR)

Etapas	Institución responsable	Participantes
Evaluación preliminar.	INCOPECA.	Direcciones Institucionales - Dirección General Técnica - Dirección de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas. - Dirección General Administrativa.
Preparación del PR.	INCOPECA	Direcciones Institucionales - Dirección General Técnica - Dirección de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas. - Dirección General Administrativa.
Implementación del PR	INCOPECA.	Direcciones Institucionales - Dirección General Técnica - Dirección de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas. - Dirección General Administrativa.
Seguimiento y monitoreo	INCOPECA.	Direcciones Institucionales - Dirección General Técnica - Dirección de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas. - Dirección General Administrativa.

Fuente: INCOPECA, 2018

X. Mecanismos de Consulta y Participación.

Este MPRI estará frente a “procesos de participación” que buscarán incluir a todas las personas afectadas por el reasentamiento, quienes deben incorporarse desde la planificación de los PR para dar sostenibilidad a las medidas a implementar.

Los procesos participativos tendrán por objetivo complementar el levantamiento de la línea base, revisar los criterios de elegibilidad y las posibles medidas de compensación propuestas.

El proceso participativo debe considerar al menos:

- a) La definición de la forma de participación con las personas afectadas y las comunidades de acogida en la formulación y ejecución de las actividades de reasentamiento.
- b) La identificación y definición de las actividades de reasentamiento a ejecutar.
- c) Los mecanismos para asegurar que se ofrezca individualmente a cada una de las personas /familias afectadas, información sobre los derechos que le asisten de manera individual y colectiva si es aplicable. En cualquier caso, debe garantizarse que cada una de las personas afectadas conozcan cabalmente los derechos que le asisten y el contenido de los planes de reasentamiento que les afecte.
- d) El análisis de las alternativas de reasentamiento presentadas y las decisiones adoptadas por las personas en relación con las opciones disponibles.
- e) Los mecanismos de comunicación a implementar durante el proceso de diseño e implementación del plan de reasentamiento, así como la presentación del Mecanismo de Reclamos y Sugerencias del proyecto y,
- f) El resumen de las opiniones expresadas, actas de reuniones o talleres, y acuerdos respecto al procedimiento a seguir en cada caso de personas, familias o comunidades afectadas.

El proceso de participación deberá documentarse en las respectivas **actas de acuerdo** con el procedimiento a seguir en cada caso de personas y familias afectadas. Adicionalmente, el proceso de participación permitirá identificar y definir de forma consensuada los sub planes de gestión social que acompañarán el PR de acuerdo a las necesidades levantadas.

El proyecto debe asegurar la adecuada participación de la población local especialmente de la población sujeta a afectaciones, la estrategia debe incluir acciones personalizadas con cada una de las familias afectadas, reuniones con grupos focales y talleres grupales. Los talleres son claves para socializar información relevante, así como, capacitar sobre temas de importancia y validez. Se debe de tener en cuenta que los talleres deben realizarse en las comunidades y no fuera de ellas. A estos eventos se debe incluir a comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres y jóvenes.

Importantes señalar también que los afectados o posibles afectados van a ser consultados, ya sea de manera personalizada, o como se acostumbra a realizar el dialogo con este tipo de afectaciones en el país.

Asimismo, se compartirá con suficiente antelación la información pertinente al proyecto para considerar las observaciones y aportes de la población en procura de mejorarlo. El documento será colocado en la página Web del INCOPECA donde podrá ser accesado por todas las personas interesadas dejando un archivo digital y físico de todos los aportes.

El proceso de consulta para todo el proyecto está disponible en el Plan de Consultas y Participación Social publicado sobre el pagina web de INCOPECA.

XI. Mecanismos de Monitoreo.

Para verificar el nivel de avance del proyecto se efectuará un monitoreo permanente con los instrumentos que se confeccionen para tal efecto. Será el INCOPECA quién designe al equipo técnico responsable de monitoreo.

El proceso de monitoreo debe tener en cuenta:

I. Preparar una base de datos para que la experiencia pueda ser sistematizada y servir como referencia para futuros planes. Esta base de datos se construye cuando se prepare el RAP, el censo, estudio socioeconómico y definición de los sitios de construcción de los puestos de recibo y terminales pesqueras.

2. Verificar que las acciones programadas que están siendo desarrolladas y en el caso de identificar incumplimiento proponer medidas correctivas.
3. Registrar los eventos más importantes del proceso de Reasentamiento (adquisición de inmueble y traslado de cada unidad social), permitiendo así identificar problemas, tomar medidas para la solución de los mismos.
4. Analizar el cumplimiento de todas las actividades del cronograma.
5. Identificar los indicadores de logro.
6. Diseñar actividades que faciliten identificar a tiempo cambios no previstos en las condiciones socioeconómicas de las unidades sociales, formular y proponer las acciones de lugar.
7. Se harán informes trimestrales, los cuales serán enviados al banco.

Nota: Habrá un equipo responsable del monitoreo, integrado por el equipo técnico del INCOPECA. La incorporación de la comunidad al proceso de monitoreo provoca mayor confianza en los resultados exhibidos.

XII. Mecanismos de Quejas y Reclamos.

La gestión de las quejas y reclamos se llevará a cabo de una manera culturalmente adecuada y será discreta, objetiva, sensible y receptiva a las necesidades e inquietudes de las partes afectadas. El mecanismo también permitirá que se planteen y aborden quejas y reclamos anónimos.

El mecanismo busca abordar los problemas en una etapa temprana y, en caso sea necesario, provea una acción que dé solución a la queja o reclamo. Con la implementación de este mecanismo, se atenderán las quejas, reclamos o consultas que se presenten por parte de las partes interesadas en el Proyecto, asegurando la accesibilidad, pertinencia y participación de todas las partes con la atención y respuesta de sus inquietudes.

Este mecanismo permitirá, además, transparentar la comunicación ante posibles percepciones y/o dudas en toda la etapa del proyecto, de modo que coadyuvará a minimizar riesgos en el área de intervención, siguiendo un Procedimiento para el registro de Mecanismo de atención de quejas, reclamos o consultas.

Para el desarrollo de este mecanismo se contará con un sistema informático que comprenda y soporte todos los componentes necesarios para la implementación del mismo en todas las etapas del proyecto.

Vías para la recepción de consultas, quejas o reclamos: Para las etapas de ejecución del proyecto, el Plan desarrolla una relación directa con todos los afectados y partes interesadas del Proyecto. En el desarrollo de estas actividades, los actores locales suelen demandar una atención personalizada que les facilite hacer consultas y presentar inquietudes o quejas sobre las actividades que se vienen realizando en su zona. Para cumplir con los requisitos de un mecanismo accesible e inclusivo, los especialistas sociales o ambientales del Área de Gestión Social y Ambiental del Proyecto podrán atender y canalizar las sugerencias o quejas que los actores locales les manifiesten durante el proceso de relacionamiento en campo. Adicionalmente, en el momento en que se instale la Oficina de Atención Permanente (OAP) se divulgará la dirección de dicha oficina.

Las quejas, reclamos o consultas podrán ser presentados a través de las siguientes vías:

- Vía teléfonos: Línea fija de teléfono al 2630-0629, el horario de atención es de Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 4:00pm.
- Vía email: Enviando su queja, reclamo y/o solicitud al siguiente correo electrónico: proyectodesarrollosostenible@incopesca.go.cr
- Vía web: A través de la web del proyecto: https://www.incopesca.go.cr/publicaciones/consulta_cudadana_proy.html

- De manera personal: La Oficina de la Presidencia Ejecutiva establecerá una Oficina Permanente del proyecto, a través de la cual podrá presentar su queja, reclamo y/o solicitud, quien deberá llenar la ficha formato que corresponda del Plan. En el horario de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 4 p.m.

- Por medio escrito: Por medio de carta o Libro de Reclamaciones en la Oficina Permanente del proyecto, ubicada en las instalaciones centrales del INCOPECA en El Cocal, Puntarenas. En el horario de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 4 p.m.

La población del área de influencia directa e indirecta del proyecto, será informada de las plataformas que comprende el mecanismo de quejas y reclamos, por medio de volantes informativos y medio virtuales, actividades que estarán a cargo del especialista social.

Durante la etapa de ejecución del proyecto, las quejas, reclamos o consultas que surjan por parte de los ciudadanos seguirán siendo lideradas y monitoreadas por el área de gestión social-ambiental del Proyecto. Es importante indicar que durante este periodo del Proyecto cada caso registrado será atendido

- Definiciones y tiempos de respuesta

Definiciones y consideraciones de tiempo para las respuestas a las quejas o reclamos.

Consulta: Expresión oral o escrita por parte de las personas, que tengan dudas y/o requieran información sobre un tema específico relacionado con las actividades que realiza el proyecto.

Término de respuesta: De acuerdo a la complejidad del tema puede ser *ipso facto* o en un plazo de dos a 10 días hábiles siguientes a la recepción de la consulta.

Queja: manifestación de inconformidad, censura o descontento que formula una persona natural o jurídica, con respecto a la conducta o actuar del personal y/o servicio en el desarrollo de sus funciones.

Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción.

Reclamo: Es el derecho de toda persona natural o jurídica, de exigir o demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, relacionado al servicio o desarrollo de las actividades en el marco del Proyecto.

Término de respuesta: 15 días hábiles siguientes a la recepción.

Persona que elabora una queja o reclamo: Es una persona natural o jurídica que utiliza alguna de las vías antes descritas para presentar su queja o reclamo.

Durante el proceso de resolución de la queja o reclamo, se le deberá asignar una nomenclatura correspondiente a su estado. Los estados de gestión de la queja serán:

- Recibida
- Admitida
- Desestimada
- En proceso
- Comunicada (resolución enviada a la persona que presentó la queja, reclamo).
- Cerrada

De acuerdo al momento y al contexto social en el que se desarrolla el Proyecto, se prevé que se presenten diferentes tipos de quejas, las cuales deberán ser agrupadas según los tipos de temas más resaltantes. Teniendo en cuenta la tipología que resulte, se deberá hacer una clasificación de las quejas en categorías.

Lineamientos a considerar

Para la implementación de este mecanismo se deberá tener en cuenta los siguientes lineamientos:

- Es de interés del Proyecto que se gestione la solución oportuna y apropiada a todas las quejas presentadas, ya que la correcta implementación permitirá fortalecer los vínculos de confianza, prevenir los posibles conflictos y que el cronograma de trabajo no se vea afectado por incidentes sociales.
- Toda persona que desee presentar una queja tiene el derecho a no ser discriminada, ser tratada con respeto y recibir la orientación necesaria.
- El área de gestión social- ambiental del proyecto deberá asegurar la difusión del mecanismo de atención de quejas, reclamos y/o consultas, de manera que sea permanente, culturalmente pertinente y propiciar su accesibilidad a los grupos.

Procedimiento

La forma de proceder frente a las quejas dependerá del canal de comunicación que utilice la persona que presente la queja o reclamo. Para efectos prácticos en adelante llamaremos queja a toda queja o reclamo.

Recepción y registro de la queja

- El titular de la queja, reclamo y/o consulta deberá, además, reportar el modo en que considera que se ha visto afectado o puede verse afectado por las acciones de las actividades del proyecto.
- Las quejas, reclamos o consultas recibidas serán identificadas con un número de registro; fecha y hora de recepción; nombre de la persona responsable de la recepción; y del medio de recepción. Las quejas, reclamos o consultas se recibirán de forma escrita o verbal.
- Si la queja, reclamos y/o consultas recibidos por medio de correos electrónicos o notas no contengan la información requerida, se tratará de ubicar a la persona para completar los datos necesarios para el registro y evaluación.

Admisión de la queja

- Cada encargado de recibir quejas, a través de los canales mencionados, las clasificará e iniciará su investigación con la finalidad de analizar su admisión. Esta acción en coordinación con el coordinador de quejas, reclamos y/o consultas.
- En aquellas quejas que hayan sido derivadas por instituciones para su atención, se procederá a su clasificación y evaluación a fin de establecer el procedimiento a seguir a partir de la categoría asignada o su desestimación si es que corresponde.
- La persona encargada de recibir la queja deberá notificar a la persona que presenta la queja, reclamo y/o consulta, en un plazo no mayor de 48 horas, luego de verificar la pertinencia de su solicitud, que la misma ha sido recibida, indicando si será atendida o no será atendida.
- Cuando se determine que no será atendida, deberá justificarse y comunicarse la razón utilizando los mecanismos solicitados por el usuario demandante de la queja, reclamo y/o consulta: envío a domicilio o por correo electrónico. Esta acción es previa coordinación con el responsable de monitorear y dar seguimiento al cumplimiento del adecuado funcionamiento del mecanismo de quejas, reclamos y/o consultas.
- Si la información dada por el solicitante de la queja, reclamo es insuficiente, la persona encargada de recibir la queja o reclamo deberá buscar información adicional para la aclaración de la misma.
- Si la persona que presentan la queja no desea continuar dando información, el caso será cerrado y será informado al solicitante dejando constancia de la búsqueda de información. Se dejará registro de la gestión.
- La persona asignada para el monitoreo y seguimiento de las quejas, reclamos deberá evaluar la pertinencia y naturaleza de las mismas. Asimismo, se asegurará que al momento del registro de la queja y/o reclamo, el solicitante haya entregado evidencias o información que sustente la misma a fin de tener información complementaria.

- La persona asignada para el monitoreo y seguimiento de las quejas y reclamos deberá evaluar que el personal que recoge la queja o reclamo cumpla con todos los procedimientos antes mencionados a fin de que las quejas y/o reclamos sean absueltas con objetividad.

Gestión y resolución de la queja

- El Coordinador de Quejas se encargará de realizar las gestiones de investigación de la queja en campo junto a personal de apoyo.

- El responsable de monitorear el cumplimiento del mecanismo de quejas, reclamos y/o consultas coordinará con las áreas y/o técnicos en caso que se requiera, para la atención de la queja, reclamo o consulta. En caso de requerirse, se realizará la inspección, atención o trámite de la misma, comunicando o notificando día y hora a la persona que presenta la queja, reclamo o consulta.

- De acuerdo a la evaluación, el Coordinador de Quejas se encargará de gestionar su resolución en coordinación con las áreas involucradas, según la pertinencia de estas para su atención. Las quejas serán derivadas al área a la que se vincula la queja para su atención correspondiente.

- El Coordinador de Quejas es responsable de gestionar la queja. Gestionar supone evaluar y derivar la queja para tomar acciones correctivas, recopilar información y elaborar respuesta y enviar la respuesta, dentro de los plazos máximos ya indicados.

- La respuesta a la persona que presentó la queja deberá ser aprobada por el área técnica y/o legal correspondiente y contar con su conformidad.

- Al momento de notificar la respuesta al solicitante de la queja y/o reclamo se deberá consignar todos los datos. La respuesta será notificada a su domicilio y/o vía correo electrónico (notificación formal).

- En el caso de las quejas anónimas, se procederá a su clasificación y evaluación para establecer el proceso a seguir a partir de la categoría asignada.

- Si la persona que presentó la queja acepta la decisión tomada, el Coordinador de Quejas dará por cerrado o concluido el proceso de queja, reclamo y/o consulta.

- Si la persona que hizo la queja se niega a recibir la respuesta o no es posible contactarlo para la entrega, el Coordinador de Quejas coordinará con el Área Legal para evaluar lo que resulte pertinente con la finalidad de obtener un documento que certifique la entrega de respuesta a la persona que realizó la queja y darla por "Cerrada".

- Posterior a la presentación de la solución planteada a la persona que hizo la queja, en caso este no dé respuesta alguna en un plazo máximo de 48 horas, se procederá a dar "Cierre" de la queja. Si luego del plazo la persona que presentó la queja busca apelar sobre la misma, se le indicará que deberá iniciar nuevamente el procedimiento para su atención.

- Las apelaciones serán admitidas al día siguiente de la fecha de su recepción. Si la persona que desea apelar lo requiere, podrá solicitar una reunión con el coordinador de la Gestión de Quejas y Reclamos
- De no haber acuerdo sobre la apelación, las partes pueden recurrir a un tercero imparcial para abordar el disenso u otra instancia pública que consideren necesaria.

Archivo y documentación

- Una vez finalizada la resolución de la queja, reclamo y/o consulta hasta la notificación de dicha resolución, se archivará toda la documentación generada. Los archivos deberán mantenerse durante todo el ciclo de vida del Proyecto
- De requerirse información por entidades externas pero vinculadas al Proyecto reportes y/o reuniones sobre la implementación del mecanismo se atenderán a través del Coordinador de Quejas, Reclamos.

Anexos

Anexo 1. Estructura sugerida de los planes de reasentamiento

El alcance de los planes de reasentamiento será proporcional a la magnitud e intensidad de las afectaciones, y el nivel de vulnerabilidad de los afectados.

Descripción del proyecto. Descripción general del proyecto e identificación de la zona del proyecto.

Posibles efectos. Identificación de:

- a) el componente o las actividades del proyecto que dan origen a reasentamiento;
- b) la zona de impacto del componente o de las actividades;
- c) las alternativas estudiadas para evitar o reducir al mínimo el reasentamiento, y
- d) los mecanismos establecidos para reducir al mínimo el reasentamiento durante la ejecución del proyecto, dentro de lo posible.

Objetivos. Los principales objetivos del programa de reasentamiento.

Estudios socioeconómicos. Las conclusiones de los estudios socioeconómicos que se dan durante las primeras etapas de la preparación del proyecto y con la participación de las personas que posiblemente resultarán desplazadas, lo que incluye:

- a) los resultados de un censo sobre: i) los ocupantes actuales de la zona afectada con el fin de establecer una base para la formulación del programa de reasentamiento y de evitar que las personas que lleguen a establecerse en la zona posteriormente puedan acogerse al pago de indemnización y recibir asistencia para el reasentamiento; ii) las características típicas de las unidades familiares desplazadas, en particular una descripción de los sistemas de producción, la mano de obra y la organización familiar; e información sobre los medios de subsistencia (en particular, los niveles de producción y los ingresos derivados de actividades económicas tanto formales como informales) y los niveles de vida (inclusive el estado de salud) de la población desplazada; iii) la magnitud de la pérdida prevista –total o parcial– de activos, y el alcance del desplazamiento, físico o económico; iv) información sobre grupos o personas vulnerables según lo dispuesto en el párrafo 8 del documento

OP 4.12, respecto de los cuales tal vez sea necesario establecer disposiciones especiales, y v) disposiciones para la actualización a intervalos regulares de la información sobre los medios de subsistencia y los niveles de vida de la población desplazada a fin de que en el momento de su desplazamiento se disponga de la información más reciente.

b) Otros estudios en los que se describa lo siguiente:

i) los sistemas de tenencia y transferencia tierras, en particular un inventario de los recursos naturales de propiedad común de los cuales las personas obtienen sus medios de subsistencia y su sustento, los sistemas de usufructo sin título de propiedad (inclusive los derechos de pesca, pastoreo o utilización de zonas forestales) que se rigen por mecanismos de asignación de tierras reconocidos localmente, y los problemas que puedan plantear los sistemas de tenencia diferentes en la zona del proyecto; ii) las modalidades de interacción social en las comunidades afectadas, en particular las redes sociales y los sistemas de apoyo social, y la forma en que las afectará el proyecto; iii) los servicios públicos de infraestructura y los servicios sociales que resultarán afectados, y iv) las características sociales y culturales de las comunidades desplazadas, en particular una descripción de las instituciones formales e informales (por ejemplo, organizaciones comunitarias, grupos rituales, organizaciones no gubernamentales [ONG]) que puedan tener importancia para la estrategia de consultas y para la elaboración y ejecución de las actividades de reasentamiento.

Marco jurídico. Las conclusiones de un análisis del marco jurídico, que abarque:

a) el alcance del derecho de expropiación y la índole de la compensación vinculada a éste, tanto en cuanto al método de valoración como a la fecha de pago; b) Los procedimientos jurídicos y administrativos aplicables, en particular una descripción de los recursos judiciales de que disponen las personas desplazadas y el plazo normal para interponerlos, y cualesquiera otros mecanismos disponibles de solución de controversias que puedan guardar relación con el reasentamiento que entraña el proyecto; c) la normas pertinentes (en particular las de derecho consuetudinario y tradicional) que gobiernan la tenencia de tierras, la valoración de los activos y las pérdidas, la indemnización, y los derechos de uso de los recursos naturales; el derecho consuetudinario personal relacionado con el desplazamiento, y las leyes ambientales y la legislación sobre bienestar social;

d) las leyes y reglamentos relacionados con los organismos responsables de ejecutar las actividades de reasentamiento; e) de haberse, las divergencias entre las leyes locales relativas al derecho de expropiación y al reasentamiento y la política de reasentamiento del Banco y los mecanismos para resolver esas divergencias, y f) cualesquiera medidas legales necesarias para asegurar una ejecución eficaz de las actividades de reasentamiento relativas al proyecto, en particular, según corresponda, un proceso para el reconocimiento de los derechos legales sobre la tierra que se reclaman, inclusive las reclamaciones que dimanen del derecho consuetudinario y del uso tradicional (véase el inciso b) del párrafo 15 de la Política Operacional OP 4.12). 8. Marco institucional. Las conclusiones de un análisis del marco institucional que abarque a) la identificación de los organismos responsables de las actividades de reasentamiento y las ONG que puedan tener participación en la ejecución del proyecto; b) una evaluación de la capacidad institucional de esos organismos y ONG, y c) cualesquiera medidas que se propongan para mejorar la capacidad institucional de los organismos y las ONG responsables de la ejecución del reasentamiento.

Elegibilidad. Definición de las personas desplazadas y criterios que determinan su derecho a recibir compensación y otro tipo de asistencia para el reasentamiento, y establecimiento de las fechas límites pertinentes. 10. Valoración de las pérdidas e indemnización. La metodología que habrá de utilizarse para valorar las pérdidas y que determina su costo de reposición, y una descripción de los tipos y niveles de compensación propuestos según la legislación local y las medidas complementarias necesarias para obtener el costo de reposición de los bienes perdidos.

Medidas de reasentamiento. Una descripción de las medidas de indemnización y otras medidas relacionadas con el reasentamiento que ayudarán a cada una de las categorías de personas desplazadas con derecho a ello a lograr los objetivos de la política (véase el párrafo 6 del documento OP 4.12). Además de ser técnica y económicamente viables, las medidas de reasentamiento deberán ser compatibles con las preferencias culturales de las personas desplazadas y deberán prepararse en consulta con éstas.

Selección y preparación del emplazamiento, y reubicación. La consideración de diversos sitios posibles de reubicación y una explicación sobre los sitios seleccionados, que abarque a) los

mecanismos institucionales y técnicos para la identificación y preparación de los sitios de reubicación, sean éstos rurales o urbanos, respecto de los cuales el potencial productivo, las ventajas de ubicación y otros factores sean, como mínimo, comparables a los del sitio anterior, junto con una estimación del tiempo necesario para la adquisición y transferencia de tierras y recursos conexos; b) las disposiciones necesarias para impedir la especulación en materia de tierras o la afluencia a los emplazamientos seleccionados de personas sin derecho a ello; c) los procedimientos para la reubicación física en relación con el proyecto, en particular calendarios para la preparación del emplazamiento y la transferencia de la población, y d) los mecanismos legales para regularizar la tenencia de tierras y transferir los títulos de propiedad a los reasentados.

Servicios de vivienda, infraestructura y servicios sociales. Planes para el suministro (o para financiar el suministro por parte de los reasentados) de vivienda, infraestructura (por ejemplo, abastecimiento de agua, caminos de acceso), y servicios sociales (por ejemplo, escuelas, servicios de salud), planes para asegurar servicios comparables para las poblaciones de acogida, y cualquier urbanización de terrenos y preparación de diseños técnicos y arquitectónicos que sean necesarios para los emplazamientos.

Protección y gestión ambientales. Una descripción de los límites de la zona de reubicación, y una evaluación de los impactos ambientales del reasentamiento propuesto y medidas para mitigar y gestionar esos impactos (coordinadas, según proceda, con la evaluación ambiental de la inversión principal que hace necesario el reasentamiento).

Participación de la comunidad. Participación de los reasentados y de las comunidades de acogida⁴, en particular a) una descripción de la estrategia de consulta con los reasentados y las comunidades de acogida y de participación de éstos en la formulación y ejecución de las actividades de reasentamiento; b) un resumen de las opiniones expresadas y de la forma en que se tuvieron en cuenta al preparar el plan de reasentamiento; c) un examen de las alternativas de reasentamiento presentadas y las decisiones adoptadas por las personas desplazadas con respecto a las opciones de que disponían, en particular las decisiones relativas a las formas de compensación y de asistencia para el reasentamiento, a su reubicación como unidades familiares individuales o como parte de

comunidades preexistentes o de grupos de parientes, al mantenimiento de las modalidades existentes de organización en grupo y a la conservación del acceso a los bienes culturales (por ejemplo, lugares de culto, centros de peregrinaje, cementerios), y d) los mecanismos institucionalizados mediante los cuales las personas desplazadas pueden comunicar sus preocupaciones a las autoridades encargadas del proyecto a lo largo de todo el proceso de planificación y ejecución, y las medidas destinadas a velar por que los grupos vulnerables tales como las poblaciones indígenas, las minorías étnicas, los que carecen de tierras y las mujeres estén suficientemente representados.

Integración con las poblaciones de acogida. Medidas para mitigar el impacto del reasentamiento en las comunidades de acogida, si las hay, en particular a) consultas con las comunidades de acogida y los gobiernos locales; b) disposiciones para que se efectúen sin tardanza los pagos que se deban a las comunidades de acogida por las tierras u otros bienes proporcionados a los reasentados; c) disposiciones para atender a cualquier conflicto que pueda presentarse entre los reasentados y las comunidades de acogida, y d) las medidas que sean necesarias para aumentar los servicios (por ejemplo, educación, abastecimiento de agua, salud, y servicios de producción) en las comunidades de acogida, a fin de hacerlos comparables, como mínimo, a los servicios de que disponen los reasentados.

Procedimientos de reclamación. Procedimientos asequibles y accesibles para la solución por terceros de las controversias que se deriven del reasentamiento; los mecanismos de reclamación deberían tener en cuenta la disponibilidad de recursos judiciales y de mecanismos comunitarios y tradicionales de solución de controversias.

Responsabilidades institucionales. El marco institucional para la ejecución del reasentamiento, en particular la identificación de los organismos responsables del cumplimiento de las medidas de reasentamiento y el suministro de servicios; los mecanismos necesarios para asegurar una coordinación apropiada entre los organismos y las jurisdicciones que participan en la ejecución, y las medidas (en particular medidas de asistencia técnica) que sean necesarias para fortalecer la capacidad de los organismos de ejecución para formular y llevar a cabo actividades de reasentamiento; las disposiciones para la transferencia a las autoridades locales o a los propios

reasentados de la función de gestión de instalaciones y servicios proporcionados en relación con el proyecto y para la transferencia de otras responsabilidades de esa índole de los organismos de ejecución del reasentamiento, cuando proceda.

Calendario de ejecución. Un calendario de ejecución que abarque todas las actividades de reasentamiento desde la preparación hasta la ejecución, incluso las fechas en que se estima que las poblaciones reasentadas y las poblaciones de acogida obtendrán los beneficios previstos y las fechas de terminación de las distintas formas de asistencia. En el calendario se debería indicar la forma en que las actividades de reasentamiento estarán vinculadas a la ejecución del proyecto en general.

Costos y presupuesto. Cuadros en que figuren estimaciones detalladas de los costos de todas las actividades de reasentamiento, incluso teniendo en cuenta la inflación, el crecimiento de la población y otros imprevistos; calendarios para los gastos; fuentes de fondos; y disposiciones para la afluencia oportuna de fondos, y financiamiento para el reasentamiento, según el caso, en zonas que quedan fuera de la jurisdicción de los organismos de ejecución.

Seguimiento y evaluación. Disposiciones para el seguimiento de las actividades de reasentamiento por parte del organismo de ejecución, complementadas con actividades de seguimiento realizadas por supervisores independientes, según el Banco lo estime apropiado, para velar por que la información sea completa y objetiva; indicadores de seguimiento del desempeño para medir los insumos, los productos y los resultados de las actividades de reasentamiento; participación de las personas desplazadas en el proceso de seguimiento; evaluación del impacto del reasentamiento durante un período razonable después de que todas las actividades de reasentamiento y actividades de desarrollo conexas hayan quedado terminadas; utilización de los resultados del seguimiento del reasentamiento como guía para la ejecución posterior.

Anexo 2. Contenido de los planes de reasentamiento abreviados

En ciertas situaciones se podría preparar un plan abreviado si los casos en que los efectos en la totalidad de la población desplazada o afectadas sean mínimos. Por ejemplo, si las personas afectadas no resultan desplazadas físicamente y pierden menos del 10% de sus activos productivos. Otro escenario es si el número de personas desplazadas es inferior a 200 y no son personas vulnerables, hay un mercado que permite reponer los bienes afectados, y los afectados poseen títulos de propiedad. En estos casos se podrá acordar que un plan de reasentamiento abreviado sería suficiente, previo acuerdo con el Banco. Un plan abreviado comprenderá, como mínimo, los elementos siguientes : a) un censo de las personas desplazadas y la valoración de los activos; b) una descripción de la compensación y otro tipo de asistencia para el reasentamiento que se ha de proporcionar; c) la celebración de consultas con las personas desplazadas sobre alternativas aceptables; d) responsabilidad institucional por la ejecución y los procedimientos para la compensación de las reclamaciones; e) disposiciones sobre seguimiento y evaluación, y f) calendario y presupuesto.